



GACETA DEL CONGRESO

SENADO Y CÁMARA

(Artículo 36, Ley 5ª de 1992)

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

www.imprenta.gov.co

ISSN 0123 - 9066

AÑO XXXIV - N° 162

Bogotá, D. C., lunes, 24 de febrero de 2025

EDICIÓN DE 22 PÁGINAS

DIRECTORES:

DIEGO ALEJANDRO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO GENERAL DEL SENADO

www.secretariassenado.gov.co

JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA

SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA

www.camara.gov.co

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

CÁMARA DE REPRESENTANTES

PONENCIAS

INFORME DE PONENCIA POSITIVA PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 407 DE 2024 CÁMARA, 08 DE 2024 SENADO

por la cual se fortalece la lucha contra el maltrato animal y se actualiza el Estatuto Nacional de
Protección de los Animales Ley 84 de 1989 - Ley Ángel.

Bogotá D.C., febrero de 2025

Presidente
JAIME RAÚL SALAMANCA TORRES
Cámara de Representantes
Bogotá D.C.

Referencia: Informe de ponencia para segundo debate al Proyecto de Ley No. 407 de 2024 Cámara – 008 de 2024 Senado “Por la cual se fortalece la lucha contra el maltrato animal y se actualiza el Estatuto Nacional de Protección de los Animales Ley 84 de 1989 - Ley Ángel”.

Respetado presidente.

En cumplimiento del encargo hecho por la honorable mesa directiva de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y de conformidad con lo establecido en el artículo 156 de la Ley 5ª de 1992, procedo a rendir informe de ponencia positiva para segundo debate al Proyecto de Ley No. 407 de 2024 Cámara – 008 de 2024 Senado “Por la cual se fortalece la lucha contra el maltrato animal y se actualiza el Estatuto Nacional de Protección de los Animales Ley 84 de 1989 - Ley Ángel”.

Atentamente.

JUAN CARLOS WILLS OSPINA
Representante a la Cámara

INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE LEY NO. 407 DE 2024 CÁMARA – 008 DE 2024 SENADO “POR LA CUAL SE FORTALECE LA LUCHA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL Y SE ACTUALIZA EL ESTATUTO NACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES LEY 84 DE 1989 - LEY ÁNGEL”.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. OBJETO.

De acuerdo con lo establecido por los autores de la iniciativa, el presente proyecto de ley tiene como objetivo primordial fortalecer la lucha contra el maltrato animal mediante la implementación de acciones que aseguren la investigación y sanción efectiva de la violencia contra los animales en los procesos penales y sancionatorios policivos, así como prevenir dichas conductas a través de iniciativas de sensibilización. Para alcanzar este objetivo, el proyecto se articula en tres bloques fundamentales, así: i) La modificación del régimen penal relativo a los delitos contra los animales. ii) La reforma de las leyes 84 de 1989, 1774 de 2016 y 1801 de 2016, con el propósito de unificar la dispersión normativa existente en la materia y que afecta en la práctica la protección de la integridad de los animales y actualizando el procedimiento sancionatorio policivo. iii) La implementación de otras medidas orientadas a la sensibilización de la sociedad civil y de los funcionarios responsables de atender de manera oportuna los casos de maltrato animal que se presenten en el país.

II. TRÁMITE.

El proyecto de Ley fue radicado el 20 de julio de 2024 por los siguientes congresistas: H.S. Andrea Padilla Villarraga, Germán Blanco Álvarez, Humberto de La Calle Lombana, Jonathan Pulido Hernández, John Jairo Roldán Avendaño, Ana Carolina Espitia Jeréz, Fabián Díaz Plata, Nadia Blel Scaff, Yenny Roza Zambrano, Andrés Guerra Hoyos, Martha Isabel Peralta Epieyú, Juan Pablo Gallo, Berenice Bedoya Pérez, Nicolas Albeiro Echeverry Albarán, Marcos Daniel Pineda García, Claudia María Pérez Giraldo, Pablo Catatumbo y los H.R. Alirio Uribe Muñoz, Juan Sebastián Gómez Gonzalez, Cristian Danilo Avendaño Fino, Mauricio Cuellar Pinzón, Juan Camilo Londoño Barrera, Ana Rogelia Monsalve Álvarez, Alejandro García Ríos.

<p>Habiendo culminado exitosamente sus dos debates en el Senado, el proyecto de ley fue enviado a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, en donde fui designado como ponente único de la iniciativa, logrando la aprobación de la iniciativa en su primer debate Cámara, el pasado 11 de diciembre de 2024.</p> <p>Restando un debate para lograr la aprobación de este importantísimo proyecto, se procede a rendir informe de ponencia positiva para segundo debate en Cámara.</p> <p>A continuación, se relaciona información, respecto de la justificación, el marco jurídico y el análisis del impacto fiscal de la presente iniciativa, de acuerdo con lo consagrado por los autores del proyecto de ley.</p> <p>III. JUSTIFICACIÓN.</p> <p>Seguido de lo anterior, es importante reconocer los avances y las ventajas que trajo consigo la expedición en el año 2016 de la Ley 1774, que sin lugar a duda marcó un derrotero legislativo en la regulación jurídica de los animales. En ella, por primera vez se reconoció la existencia de una condición característica de los animales no humanos que los separa de las cosas, y que marca el primer paso para el reconocimiento de derechos en virtud de una identidad e individualidad propia, la sintiencia. Así, la Ley 1774 de 2016 en su artículo primero definió con claridad que los animales como seres sintientes no son cosas, por lo cual modificó también, en su artículo segundo, el artículo 655 del Código Civil para introducir un párrafo que reconociera expresamente su calidad de seres sintientes. Posteriormente, incluyó normativamente los conocidos principios doctrinales de las cinco libertades, artículo tercero, y estableció el derrotero de las conductas que se cometan contra los animales que deben ser sancionadas por el código penal o por los inspectores de policía con multa, artículo cuarto, situación que venía del antiguo ENPA.</p> <p>De la misma manera, en su artículo quinto adiciona el título XI-A al Código Penal con el fin de incluir un capítulo único sobre delitos contra la vida, la integridad física y emocional de los animales, apuesta importante que supuso la consagración normativa de un bien jurídico propio para los animales que fuera merecedor de reproche penal con independencia de las consecuencias que se generaran para los humanos y, acto seguido, en el artículo séptimo, modificó el artículo 46 del ENPA con el fin de determinar que en materia de competencia y procedimiento serían los alcaldes y los inspectores de policía los competentes para conocer de las contravenciones contenidas en la norma, situación que se hizo sin especificar cuál sería el procedimiento sancionatorio a aplicar generando una dualidad de procedimientos, en mora de ser superado toda vez que la ley permite la existencia</p>	<p>conjunta de dos procedimientos: uno contemplado por la Ley 1801 de 2016 artículo 223 y otro por el ENPA, que si bien es inaplicable en la práctica por las referencias a figuras penales, ha generado confusiones en las autoridades policivas que no solo retrasan la expedición de sanciones a los responsables, sino que influyen en la congestión de los establecimientos de albergue provisional de los animales.</p> <p>1. Disposiciones en los procesos sancionatorios policivos.</p> <p>En el ordenamiento legal, este procedimiento tiene como objetivo sancionar las conductas de maltrato animal consideradas como leves para el ordenamiento jurídico, es decir aquellas que no atentan gravemente contra la vida e integridad de los animales. Al respecto se plantean los siguientes cambios:</p> <p>A. Unificación de normativa de protección, bienestar y derechos de los animales.</p> <p>Dentro de la mencionada dispersión legislativa encontramos como punto de partida el Estatuto Nacional de Protección y Bienestar Animal (ENPA), adoptado a través de la Ley 84 de 1989, dicha norma, que fue expedida hace 33 años y que, si bien mantiene vigencia en muchos de sus postulados, se ha vuelto inaplicable en la práctica tanto por la dualidad y contradicción normativa, como por el desconocimiento de los operadores jurídicos</p> <p>El mayor ejemplo de ello es que como se mencionó con anterioridad, al expedirse la ley 1774 de 2016 no se derogó ni subrogó el procedimiento establecido en el ENPA en su capítulo X (competencia y procedimiento) manteniendo su vigencia a pesar de su inaplicabilidad por el paso del tiempo y con la expedición de la ley 1801 de 2016, se creó un procedimiento único de policía que, en virtud del artículo 214 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, rige exclusivamente para las actuaciones adelantadas por las denominadas Autoridades de Policía en ejercicio de su función y actividad. Esta dualidad de procedimientos supuso una confusión práctica para algunos inspectores de policía quienes en muchos casos no tienen certeza sobre qué procedimiento utilizar, generando retrasos injustificados en la eventual decisión administrativa de declarar a los animales aprehendidos como aptos para adopción o para generar sanciones que efectivamente protejan sus intereses impidiendo que la autoridad administrativa deba devolverlos a los presuntos autores de las conductas, como muchas veces sucede, generando una situación de revictimización.</p>
<p>En este sentido, el ENPA contiene en su título X, a partir del artículo 46, el procedimiento para sancionar las contravenciones por maltrato animal, para lo cual entrega competencia a los alcaldes o a los inspectores de policía que hagan sus veces, y en el caso del Distrito Capital, a los inspectores de policía. Sin embargo, no sólo incluye una serie de referencias al procedimiento penal, lo que se explicará más adelante, sino que contempla una serie de etapas procesales que en la práctica riñen con el procedimiento único de policía incorporado en la Ley 1801 de 2016 y que deben seguir los inspectores para sancionar las contravenciones por maltrato animal, lo que supuso una dualidad de procedimientos que si bien podría entenderse superable por aplicación de los criterios normativos para solucionar las antinomias, en la práctica le ha supuesto dificultades a los inspectores de policía para resolver de manera eficaz los procedimientos, lo que ha generado retrasos en la solución de la situación jurídica de muchos animales y congestión en las entidades públicas encargadas de su albergue y cuidado.</p> <p>Por otra parte, pareciera que el procedimiento establecido en el ENPA se asemejara a un proceso sancionatorio de tipo penal, por las múltiples referencias que a este tipo de proceso se hacen. No obstante, como se indicó, la norma otorga competencia a los inspectores de policía y alcaldes, para quienes se vuelve imposible aplicar un procedimiento de tipo penal. Las múltiples referencias al procedimiento penal que contiene el ENPA se resumen de la siguiente manera:</p> <p>La declaración de “reo ausente” o mención del “sindicado” del artículo 47; la citación a audiencia para alegatos orales o escritos y sentencia, artículo 48; la apelación, artículo 49; el grado jurisdiccional de consulta del fallo, artículo 50; la “captura”, “detención” y el “derecho a la libertad provisional”, artículo 51; la aplicación de normas penales, artículo 56; las causales de revisión de la sentencia, artículo 58; entre otros, que riñen con el procedimiento policivo contenido en el Título III de la Ley 1801 de 2016 y según el cual deben actuar las autoridades de policía a quienes la Ley 1774 de 2016 otorgó competencia para el conocimiento y sanción de las conductas tipificadas en la norma. Es tal la contradicción existente entre los procedimientos, que a la fecha y después de 33 años de vigencia del ENPA, no se tienen registros de casos fallados por contravenciones de maltrato animal bajo el procedimiento establecido en la Ley 84 de 1989, lo que supone una clara situación e inoperancia legislativa que debe ser corregida.</p> <p>Lastimosamente, esta dualidad procedimental no sólo tiene efectos complejos en la definición del marco normativo aplicable para los casos de maltrato animal, sino que ha generado complicaciones prácticas precisamente por la ausencia de celeridad</p>	<p>en los procesos, lo que congestiona las dependencias encargadas de albergar y custodiar a los animales aprehendidos preventivamente como consecuencia de la apertura de un proceso policivo. Tal es el caso de Bogotá, donde para finales del año 2021, la Unidad de Cuidado Animal (UCA) tenía bajo su custodia 538 animales, de los cuales 230 habían sido aprehendidos por maltrato animal. Ahora, de estos 230 animales, hay algunos que llevan esperando hasta dos años porque un inspector de policía resuelva su situación jurídica, lo que contraría no sólo la misión de la UCA y las finalidades del proceso único de policía, sino que vulnera los derechos de los animales a ser adoptados y pasar el resto de sus vidas en condiciones de bienestar.</p> <p>De igual manera, según respuesta a derecho de petición con radicado 2021ER0005621-SDQS 1908012022, expedido por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá, -IDPYBA, remitida por correo electrónico del 08/06/2022, se obtiene la siguiente información: “con corte al 31 de mayo de 2022, en la Unidad de Cuidado Animal se encuentran albergados 220 animales que han ingresado por el programa de maltrato, de ellos 41 cuentan con viabilidad administrativa para hacer parte del programa de adopciones y <u>179 aún está pendiente definir su situación jurídica</u>”. (Subrayado fuera del texto original).</p> <p>Por otra parte, el problema procedimental expuesto se evidencia con la respuesta otorgada por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá que, mediante radicado 20222200199503 del 23/06/2022 y ante la pregunta sobre si ¿los inspectores de policía cuentan con un protocolo o procedimiento unificado para conocer y fallar casos de presunto maltrato animal?, la entidad mencionado refiere que: “En relación con el manejo de casos de presunto maltrato animal, fue expedido el memorando No. 20212200436873 dirigido a las Inspecciones de Atención Prioritaria referidas, a través del cual se brindaron lineamientos respecto al procedimiento respectivo, en el marco de la Ley 84 de 1989 y la aplicación del procedimiento verbal abreviado”.</p> <p>Así mismo, en el referido memorando suscrito por la Dirección para la Gestión Políciva se lee: “La problemática frente a estos casos de maltrato animal se presenta principal, aunque no exclusivamente, frente al procedimiento aplicable para conocer de las tipologías contenidas particularmente dentro de la Ley 84 de 1989, puesto que, para casos de crueldad animal, se ha empleado el proceso verbal abreviado. Ante esta situación, se han generado dos posturas diametralmente diferenciadas por parte de las autoridades especiales de Policía: aquella que opta por aplicar a las contravenciones de la Ley 84 de 1989 su propio procedimiento, y otra que</p>

entiende jurídicamente viable aplicar a dichas contravenciones el proceso verbal abreviado del artículo 223 de la Ley 1801”.

La misma confusión se hace evidente en otras entidades territoriales, como el caso de Riohacha, donde en respuesta a un derecho de petición con radicado M1120020220094 del 31/05/2022 y ante la misma pregunta, la Secretaría de Gobierno responde que: “[...] todas las actuaciones de los inspectores de policía y de los funcionarios públicos adscritos a las Secretarías de Gobierno Distrital y de la planta de personal de la Alcaldía se ciñen en el cumplimiento de las normas que se regulen en las actuaciones frente a cada caso. Igualmente es pertinente acotar que fue expedida la Ley 2054 de 03 de septiembre de 2020 por la cual se modificó el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016), en lo relacionado con el maltrato animal”. Con lo anterior, se adiciona un actor diferente al problema procedimental comentado, generando más confusión, toda vez que la citada Ley 2054 de 2020 no introduce ninguna modificación en temas procedimentales a la Ley 1801 de 2016.

En consecuencia, teniendo presente que a la fecha el legislador no modificó, actualizó, ni unificó los procedimientos que en materia policiva deben seguirse para sancionar las contravenciones por maltrato animal, que en sustancia son diferentes de las conductas constitutivas de delito y por consiguiente no puede tener referencias al proceso penal, es el momento indicado para actualizar el procedimiento policivo sancionatorio de la Ley 84 de 1989 ENPA, con el fin de que los operadores de la norma encuentren en un mismo cuerpo normativo tanto las conductas consideradas como maltrato, las sanciones a imponer y el proceso a aplicar, superando así la dispersión normativa que impera en la actualidad lo que a su vez repercutirá en la protección efectiva de los animales.

B. Aprehensión material preventiva para evitar la revictimización de los animales.

En materia de conductas constitutivas de maltrato animal que no son perseguidas por el derecho penal, el artículo 4 de la Ley 1774 de 2016, modificando la Ley 84 de 1989, estableció que los actos dañinos y de crueldad contra los animales descritos en ella que no causen la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física, serán sancionados con multa de cinco (5) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En este sentido, otorgó a los inspectores de policía y a los alcaldes, competencia para conocer de dichas contravenciones, y complementariamente, adicionó un artículo a la Ley 84 de 1989 sobre la aprehensión material preventiva, el cual reza:

Artículo 46A. Aprehensión material preventiva. Retención Preventiva.

Cuando se tenga conocimiento o indicio de la realización de conductas que constituyan maltrato contra un animal, o que de manera vulneren su bienestar físico, la Policía Nacional y las autoridades policivas competentes podrán aprehender preventivamente en forma inmediata y sin que medie orden judicial o administrativa previa, a cualquier animal. Toda denuncia deberá ser atendida como máximo en las siguientes veinticuatro (24) horas.

PARÁGRAFO. Cuando se entregue en custodia el animal doméstico a las entidades de protección animal, el responsable, cuidador o tenedor estará en la obligación de garantizar los gastos de manutención y alimentación del animal sin perjuicio de las obligaciones legales que le corresponden a los entes territoriales.

En caso de no cancelarse las expensas respectivas dentro de un plazo de quince (15) días calendario, la entidad de protección podrá disponer definitivamente para entregar en adopción el animal.

La importancia de esta figura resulta clave para el accionar de las autoridades de policía al momento de iniciar el proceso único de policía, sin embargo, no se contempló en su momento ninguna medida concreta para evitar que el animal que fuese protegido a través de esta medida preventiva no fuese regresado a su propietario, tenedor o cuidador hasta tanto no se resolviera el proceso único de policía, lo que en algunos casos se ha dado, según algunos inspectores, por la inexistencia de una figura jurídica definitiva que permita el cuidado del animal por parte de las entidades públicas. En consecuencia, en algunos casos los animales que fueron objeto de protección mediante la figura de la aprehensión material preventiva, han sido devueltos a quienes están inmersos en el desarrollo de procesos de policía por presunto maltrato animal, lo que constituye un claro efecto revictimizante.

Adicional a lo anterior, el referido artículo al momento de establecer la competencia para la imposición de la medida establece que esta se encuentra a cargo de “la Policía Nacional y las autoridades policivas competentes”, situación que ha generado conflictos de competencia en aquellas entidades territoriales donde coexisten inspectores de policía con otras autoridades policivas, como el caso de Bogotá. Así entonces, mediante la presente iniciativa se pretende aclarar cuáles son las autoridades de policía con competencia para imponer la medida de aprehensión material preventiva, evitando choques de competencia, especialmente por el ámbito negativo, que ha generado inacción estatal en contra de los intereses de los animales.

En virtud de lo anterior, resulta necesario modificar lo relativo a la Aprehensión Material Preventiva, con el fin de aclarar cuáles son las autoridades con competencia para la imposición de la medida (Policía Nacional, inspectores de policía, alcaldías municipales o distritales y entidades de protección animal), así como, establecer una herramienta que permita a dichas autoridades abstenerse legítimamente de entregar o devolver a los animales protegidos por la aprehensión preventiva a quienes ostentan su tenencia o cuidado al momento de la imposición de la medida, toda vez que, debe garantizarse cuidadosamente su bienestar hasta que exista decisión en firme en el proceso policivo que culmine con la imposición de una o varias medidas correctivas en contra del infractor, evitando de esta manera la revictimización del animal.

La importancia de la aprehensión material preventiva y de su correcto funcionamiento, incluyendo la nueva finalidad de evitar la revictimización de los animales, se fundamenta en los datos proporcionados por la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía Nacional, entidad que en respuesta a derecho de petición con radicado GS-2022-031068-DICAR del 14/06/2022, y ante la pregunta sobre cuántas aprehensiones materiales preventivas ha realizado la Policía Nacional en los últimos 3 años, refiere que: “En el Sistema de Información Estadístico, Delictivo, Contravencional y Operativo (SIEDCO), en el cual reposa información estadística relacionada con los procedimientos efectuados con especímenes de la biodiversidad colombiana, particularmente las acciones de control al maltrato animal, se evidencia que desde el año 2020, se ha realizado la aprehensión preventiva de 7.103 animales domésticos”, lo que supone un número importante teniendo en cuenta que sólo se incluye información correspondiente a dos años, pero que implica de igual manera la necesidad de reforzar la figura para evitar la revictimización de los animales.

En el mismo sentido, el Instituto de Protección y Bienestar Animal de Bogotá - IDPYBA, en el radicado referido anteriormente, indica que, con corte a mayo de 2022, se reportan 481 animales entre caninos y felinos albergados en la Unidad de Cuidado Animal. De ellos, 220 han ingresado por el programa de maltrato, estando 49 con viabilidad administrativa para hacer parte del programa de adopciones y 179 pendientes de resolución de su situación jurídica. Históricamente, desde su creación, el IDPYBA reporta los siguientes datos sobre animales atendidos.

Vigencia	Animales atendidos
2020	4.196
2021	5.874

2022	1.725
Total	11.795

Fuente: SEGPLAN. 2022.

Imagen 1. Animales valorados por el Escuadrón Anticrueldad. Fuente. SEGPLAN 2022, respuesta a derecho de petición.

C. Sobre el ingreso de la Policía Nacional a domicilios sin mandamiento escrito, cuando sea de imperiosa necesidad para la protección del bienestar y la integridad física y emocional de los animales.

Este proyecto de ley, plantea una reforma importante al artículo 163 de la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, con el fin de incluir una causal por la cual, la Policía Nacional pueda ingresar a domicilios sin mandamiento escrito previo, para proteger la vida e integridad de los animales. De esta manera, se busca que dichas autoridades puedan realizar esta importante labor para socorrer a un animal cuando se tenga certeza de la realización de conductas constitutivas de maltrato animal y que pongan en riesgo inminente la vida o integridad de este. Sobre esta disposición, es importante resaltar que el texto tuvo importantes modificaciones con los aportes hechos por los Senadores de la Comisión Primera Constitucional Permanente con el fin de que se mantuviera dicha disposición para proteger la vida del animal ante situaciones urgentes, pero modificando la redacción para proteger a los ciudadanos ante posibles extralimitaciones de la Policía Nacional.

Son varios los casos en virtud de los cuales la Policía Nacional, ante primeras denuncias o verificaciones, no puede actuar de manera eficaz para socorrer animales en tanto que no se cuenta con el permiso del morador del inmueble o bien, con orden escrita de autoridad competente, lo que deja a los animales en una situación de vulnerabilidad y riesgo dado el vacío jurídico existente que impide la acción policial. En este sentido, hay casos documentados en la prensa en donde la Policía finalmente logra rescatar al animal, como el recordado caso de Barranquilla¹ o en Bogotá.² Sin embargo, en estos casos no queda claro cuánto tiempo pasó entre las primeras denuncias o reportes y la efectiva acción policiva, razón por la cual, es imperioso que la Policía Nacional tenga un soporte normativo más contundente para

¹ Más información en <https://www.eluniversal.com.co/regional/atlantico/policia-rescato-en-barranquilla-a-perro-encerrado-y-abandonado-por-sus-duenos-AG5954615>

² Más información en https://caracol.com.co/radio/2019/11/20/tendencias/1574272449_115699.html

<p>poder actuar de manera inmediata sin desconocer las garantías constitucionales que existen sobre la propiedad privada.</p> <p>Es importante establecer que el artículo 163 de la mencionada ley, ha sido objeto de múltiples pronunciamientos en materia de constitucionalidad, pues plantea un problema jurídico en que se enfrentan varios derechos fundamentales. De un lado, aquellos relativos a la intimidad, la libertad y la inviolabilidad del domicilio, y por otro lado, aquellos relativos a la vida, la dignidad, la seguridad, la tranquilidad y la convivencia, y la protección del patrimonio, entre otros.</p> <p>En ese sentido, en el pronunciamiento más reciente, la Corte Constitucional mediante sentencia C-022 de 2018, decidió acogerse a lo resuelto en sentencia C-212 de 2017, mediante la cual se declaró la exequibilidad del artículo 163 de la Ley 1801 de 2016 en sus 6 numerales, así como, declaró la exequibilidad de los apartes demandados del parágrafo 1 de la misma norma, en el entendido de que el cumplimiento de las garantías allí previstas no excluye la realización de un control judicial posterior de la actuación policial. Ahora, en dicha sentencia también se analizó el fenómeno de la cosa juzgada constitucional en relación con la sentencia C-176 de 2007, toda vez que, el contenido material del artículo 163 de la Ley 1801 de 2016, era el mismo que aquel que se consagra en el Código Nacional de Policía anterior, es decir, el establecido en el artículo 83 del Decreto Ley 1355 de 1970.</p> <p>Al respecto, la Corte estableció lo siguiente: “[...] La demanda formulada en 2007 contra el artículo 83 del Decreto-Ley 1355 de 1970 consideraba que “allanar domicilios sin mandamiento escrito, vulnera los artículos 28 y 32 de la Carta, en tanto que, salvo el caso de flagrancia, “en ninguna parte del texto constitucional se consagró excepción alguna para que la policía nacional pudiera ordenar registros y allanamiento, ello es competencia exclusiva y excluyente de las autoridades judiciales” [16]. Por consiguiente, el problema jurídico que resolvió la Corte Constitucional consistió en determinar, “si la autorización que el artículo 83 del Decreto 1355 de 1970 otorga (sic) a la Policía para penetrar un domicilio, sin mandamiento escrito, en los casos de imperiosa necesidad que la norma describe, viola el derecho de inviolabilidad del domicilio”. En el presente caso la demanda que las ciudadanas formulan contra el artículo 163 de la Ley 1801 de 2016 considera igualmente que la autorización concedida a la Policía Nacional para ingresar a un domicilio, sin orden judicial previa, desconoce los artículos 28 y 32 de la Constitución Política, los que expresamente protegen la inviolabilidad del domicilio a través de una regla general que exige una autorización judicial previa y una única excepción, relativa a la captura de un delincuente en estado de flagrancia. En este sentido, se</p>	<p>trata de problemas jurídicos idénticos. Debe advertirse que la acusación de vulneración del artículo 250 de la Constitución Política se refiere al parágrafo primero del artículo 163 de la Ley 1801 de 2016, el que no fue examinado en la sentencia de 2007 y, por lo tanto, resulta irrelevante este cargo para efectos de la determinación de la cosa juzgada³</p> <p>Ahora, en lo relacionado al análisis puntual sobre la constitucionalidad de la norma, la corte en sentencia C-176 de 2007 hizo especial énfasis en el carácter relativo de todos los derechos, incluso los fundamentales y en particular la inviolabilidad del domicilio, al establecer que: “[...] la rigurosa garantía de orden judicial previa a las diligencias de registro y allanamiento del domicilio puede limitarse por el legislador en casos excepcionales cuando un derecho fundamental se encuentra en grave o inminente peligro, en cuyas situaciones la autoridad administrativa autorizada por la ley para ordenar la medida debe ajustarse al objetivo de la medida (protección del derecho fundamental afectado o cumplimiento de un deber constitucional), debe ser necesaria, razonable y proporcional a la finalidad que persigue [...]”.⁴</p> <p>Así, atendiendo al carácter no absoluto del mencionado derecho y la posibilidad de atenuarlo en condiciones de imperiosa necesidad, al establecer que: “[...] la propia norma acusada no sólo establece, de manera taxativa, las situaciones en las que se autoriza el allanamiento por “imperiosa necesidad”, sino que muestra la excepcionalidad de la medida y la condiciona a situaciones extremas de inexcusable intervención policial. De hecho, el significado usual de la expresión muestra que las autoridades de policía solamente están autorizadas a aplicar la norma demandada en casos límite, esto es, en situaciones extremas que requieren la intervención urgente y obligatoria de aquellas autoridades para preservar los derechos o intereses que se encuentran en grave riesgo de afectarse”. “Entendido, entonces, que las excepciones previstas en el artículo 83 del Código de Policía deben interpretarse, todas, en el contexto general de la disposición que se refiere a situaciones que deben valorarse de acuerdo con su naturaleza taxativa, urgente, extrema e indispensable para proteger derechos fundamentales [...]”.⁵</p> <p><u>Ahora, una vez establecida la anterior regla general, la Corte analizó en detalle cada una de las excepciones que, ahora, analizadas bajo el prisma del especial deber</u></p> <p>³ Corte Constitucional. Sentencia C-212 de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo. Recuperado de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-212-17.htm</p> <p>⁴ Corte Constitucional. Sentencia C-176 de 2007. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Recuperado de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/C-176-07.htm</p> <p>⁵ Ibidem.</p>
<p><u>constitucional de protección que tiene el Estado con los animales (Artículo 1 y 79 constitucional, artículo 1 Ley 84 de 1989 y artículo 1 Ley 1774 de 2016), del deber constitucional de protección animal (Sentencia C-666 de 2010 y C-041 de 2017) y del bien jurídico propio que ostentan los animales que, en consecuencia, debe ser objeto de protección independiente por parte del estado y es merecedor incluso de reproche penal (Artículo 5 Ley 1774 de 2016 – Título XI A de la Ley 599 de 2000), permite ampliar la competencia de la Policía para ingresar a los domicilios, en las mismas condiciones descritas en la norma y analizadas en las comentadas sentencias, para socorrer la vida e integridad de los animales.</u></p> <p>Así las cosas, frente a la causal primera relativa al ingreso policial sin orden escrita para socorrer a alguien de alguna manera pida auxilio, la Corte considera no solo que se trata de una solicitud tácita a la autoridad de ingreso, consistente en la misma solicitud de auxilio, sino que se da en cumplimiento del deber de obrar conforme al principio de solidaridad social. Ahora, si bien es cierto no es fácil saber cuándo se está ante una solicitud de auxilio animal que pueda catalogarse como una solicitud tácita de ingreso al domicilio, cuestión que por sí misma escapa al conocimiento puro del derecho pues requiere la acción de otras ciencias del conocimiento como la etología (comportamiento animal), en donde puede inferirse de conformidad con algunos comportamientos animales que advierten de peligro, como los perros en la guardia, o que se solicitan ayuda como los casos documentados de delfines que acuden a buzos para alguna asistencia,⁶ o la neurociencia para saber qué tipo de juicios se desarrollan en la mente animal para tomar acciones frente a una situación de riesgo como alejarse del peligro o esconderse, cuestión ampliamente verificable en los casos de maltrato cuando los animales buscan refugio de su maltratador, lo cierto es que los animales catalogados como sintientes tiene la aptitud de manifestar comportamientos de ayuda frente a situaciones de peligro, lo que además, <u>debe leerse en armonía con el análisis de la Corte en materia del deber de obrar conforme al principio de solidaridad social, pues por mandato expreso del artículo 3 de la Ley 1774 de 2016, el Principio de Protección Animal establece que el trato a los animales se basa, entre otros, en el cumplimiento del deber de solidaridad, lo que implica necesariamente la inclusión de los animales dentro del concepto del deber de ayuda al otro cuando se encuentra frente a una situación de peligro.</u></p> <p>⁶ Más información en https://www.lavananguardia.com/vida/2013/01/25/54362370500/delfin-pide-ayuda-buzos.html#:~:text=%2D%20Un%20grupo%20de%20buzos%20se, en%20su%20aleta%20peccoral%20izquierda.</p>	<p>Ahora bien, incluso desde una perspectiva antropocéntrica se puede reforzar la inclusión de la nueva causal como quiera que en el análisis del numeral 4 del artículo 163, relativo al ingreso de la Policía, “para proteger los bienes a personas ausentes, cuando se descubra que un extraño ha penetrado violentamente o por cualquier otro medio al domicilio de estas personas”, le permitió a la Corte establecer que dicho ingreso “responde a una típica actuación de policía que se dirige a mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y para asegurar la convivencia pacífica de los ciudadanos [...]”. Así las cosas, cuando la Corte Constitucional en sentencia C-467 de 2016 definió que la consideración jurídica de los animales como bienes no afecta el mandato constitucional de proscripción de maltrato, y en consecuencia mantuvo dicho estatus jurídico, también permitió entonces determinar que el ingreso de la Policía sin orden escrita es constitucional cuando busque proteger a los animales, pues civilmente siguen respondiendo a dicha categoría, lo que evidentemente, se refuerza con las consideraciones de la sintiencia animal y de su bien jurídico propio desde una perspectiva eco-céntrica del derecho.</p> <p>Así, siendo constitucionales las causales del artículo 163, con el presente análisis se hace viable incluir una nueva, bajo las mismas condiciones y parámetros, que le permita a la Policía Nacional ingresar a domicilios, sin orden escrita, para socorrer a un animal cuando, por imperiosa necesidad, se tenga conocimiento cierto de la realización de conductas que sean constitutivas de maltrato, abandono, abuso, negligencia, explotación, acceso o abuso sexual, o que de cualquier manera puedan afectar su bienestar e integridad física o emocional, o poner en riesgo su vida.</p> <p>D. Se crea la Ruta de Atención al Maltrato Animal.</p> <p>En Colombia, el maltrato animal comporta una problemática significativa, con numerosos casos reportados cada año. Según datos recientes, en 2023 se registraron más de 1,000 casos de maltrato animal en el país⁷. En 2022, más de 200 personas fueron imputadas por delitos relacionados con el maltrato animal, incluyendo actos de crueldad como abandono, negligencia y maltrato físico⁸.</p> <p>Así mismo, una queja constante de la ciudadanía tiene que ver con las demoras y retrasos injustificados en la atención de los casos de maltrato animal que se</p> <p>⁷ INFOBAE, “Maltrato animal en Colombia: se han registrado más de 1.000 casos en 2023, según la Fiscalía”. Disponible en: https://www.infobae.com/colombia/2023/10/06/maltrato-animal-en-colombia-se-han-registrado-mas-de-1000-casos-en-2023-segun-la-fiscalia/</p> <p>⁸ Ibid.</p>

reportan ante las autoridades de policía y por las líneas de emergencia como el NUSE. Así, si bien es cierto que la Ley 1774 de 2016 en el artículo 8, relativo a la aprehensión material preventiva establece que: “[...] toda denuncia deberá ser atendida como máximo en las siguientes veinticuatro (24) horas”, esta situación en la práctica no se cumple por distintas razones.

Por ejemplo, en el radicado QUILLA-22-142119 del 07/07/2022, la oficina de inspecciones y comisarías de la Alcaldía del Distrito de Barranquilla, ante la pregunta sobre cuál es el porcentaje de denuncias sobre conductas constitutivas de maltrato animal que no están siendo atendidas dentro del término perentorio de 24 horas, refiere que: “Por parte de la Policía Nacional, normalmente se explica a la ciudadanía la diferencia entre una queja y una denuncia, toda vez que, las denuncias se interponen en las inspecciones de policía o ante la Fiscalía. Sin embargo, la atención de quejas comúnmente se realiza entre 24 y 36 horas a cargo del personal de turno, es decir, que opera de manera inmediata”.

Para abordar este problema, se propone la creación de una Ruta de Atención al Maltrato Animal, mediante la cual se busca establecer un procedimiento formal y coordinado a nivel nacional, departamental y municipal para recepcionar y atender este tipo de casos. El objetivo es el de asegurar una respuesta rápida y efectiva, protegiendo así a los animales, y garantizando que este fenómeno sea tratado con la seriedad y la urgencia que merecen, y cuyo objeto sea exclusivamente la atención de los casos de abandono, negligencia, explotación, acceso y abuso sexual, maltrato físico o emocional, o cualquier otro donde esté en riesgo la vida, el bienestar o la integridad física o emocional de un animal, en la cual se deba garantizar que toda denuncia sea atendida eficazmente

De igual manera, es importante fortalecer tanto la labor institucional como la pedagogía de la denuncia para que los casos terminen con la imposición de medidas correctivas a los infractores y en la protección de la vida e integridad del animal. En el radicado previamente citado se refiere que: “Desde el año 2019 a lo corrido del año 2022, se han conocido 48 casos por presunto maltrato animal por parte de las inspecciones de policía del Distrito de Barranquilla, dentro de los cuales algunos se encuentran en trámite, otros terminados por conciliación, otros en decomiso y disposición del ejemplar sin imposición de multa por no registrarse como reincidente y, por último, algunos resueltos en la Policía Nacional”. Así mismo, ante la pregunta sobre ¿Cuántos de los casos conocidos por maltrato animal han sido archivados, fallados o están vigentes a la fecha?, indica que “En la Inspección 14 urbana de Policía del Distrito de Barranquilla, se informan fallados y archivados 68

fin de combatir la indiferencia que a menudo impide un acceso efectivo a la justicia para estos seres vulnerables.

En este contexto, se asigna al Ministerio de Justicia y del Derecho, en colaboración con la Rama Judicial, la responsabilidad de capacitar y sensibilizar a jueces, fiscales y personal de la policía judicial. A su vez, el Ministerio del Interior desarrollará programas anuales dirigidos a los inspectores de policía a nivel nacional, enfocados en la correcta aplicación de las disposiciones vigentes en bienestar animal y en la necesidad de actuar con diligencia y empatía en casos de maltrato.

Esta iniciativa responde a la falta de herramientas adecuadas para la actualización y capacitación de los inspectores de policía en su rol sancionatorio, particularmente en situaciones de maltrato leve. Se han detectado casos en los que algunos inspectores han impuesto sanciones pecuniarias por debajo de los mínimos establecidos en la Ley 1774 de 2016 o han alegado falta de competencia en asuntos de crueldad animal, lo que revela un desconocimiento de las normativas vigentes.

Por lo tanto, el proyecto de ley busca corregir estas deficiencias, garantizando que tanto el personal judicial como las autoridades policiales estén debidamente informados y capacitados, para aplicar de manera efectiva las disposiciones legales en materia de maltrato animal.

3. Disposiciones sobre maltrato en fauna silvestre.

Finalmente, en el presente proyecto de Ley se establecen otras disposiciones que tienen por objeto fortalecer el deber constitucional y el mandato legal de protección animal, que se concretan en establecer una disposición en virtud de la cual se clarifique a los distintos operadores jurídicos, principalmente autoridades ambientales, que la imposición de las medidas correctivas contenidas en el artículo la Ley 1801 de 2016 por comportamientos que afecten a animales de especies silvestres, no excluye la imposición de otras sanciones o medidas correctivas por maltrato animal como las contenidas en la Ley 84 de 1989, en la Ley 1774 de 2016 y en las demás normas que la modifiquen o sustituyan, situación que ha sido problemática en algunos escenarios por cuestiones administrativas y que representa un grave riesgo de inacción estatal.

Sobre el particular, el Instituto de Protección y Bienestar Animal de Bogotá -IDPYBA, en el radicado referido anteriormente, indica que: “durante los años de 2020 y 2021 se realizó el acompañamiento a 16 operativos y 95 visitas de control a la tenencia ilegal de fauna silvestre donde se evaluaron 196 individuos y se emitieron 51

casos por presunto maltrato animal y vigentes actualmente 3 procesos”, lo que parece un número bajo teniendo en cuenta que el periodo de tiempo analizado es de 4 años, lo que refuerza la necesidad de revisar y consolidar la acción institucional, para lo que servirá de herramienta la Ruta de Maltrato Animal.

E. El abandono animal como causal de maltrato.

En el marco de la discusión del presente Proyecto de Ley ante la Plenaria del Senado de la República, se presentó y aprobó por unanimidad una proposición que modifica el artículo 6 de la Ley 84 de 1989 (ENPA). Dicha modificación establece como causal de actos crueles contra los animales el abandono de un animal doméstico de compañía. Dicha modificación resulta pertinente, considerando que actualmente el abandono de animales no constituye una infracción sujeta a sanción pecuniaria por parte de los inspectores de policía y aunque es frecuente que estas conductas de abandono son denunciadas por los ciudadanos, la norma actual se muestra insuficiente para garantizar la protección efectiva de los animales.

La inclusión de esta disposición tendrá un impacto positivo en varios aspectos relacionados con el abandono de animales. Por un lado, fomentará la tenencia responsable, ya que la imposición de multas funcionará como una medida disuasoria y preventiva. Por otro lado, contribuirá a reducir la presencia de gatos y perros en las calles, un problema que se agrava progresivamente, pues aunque no existen cifras oficiales, se estima que en el país hay aproximadamente tres millones de perros y gatos sin hogar⁹ de los cuales 1 de cada 10 animales en calle proviene es abandonado por una familia.¹⁰

2. Disposiciones sobre capacitación y pedagogía en bienestar animal.

El proyecto de ley establece la necesidad de que todos los actores institucionales implicados en la atención y sanción del maltrato animal sean capacitados de manera integral en la normativa aplicable y en los aspectos técnicos correspondientes. Igualmente, se subraya la importancia de sensibilizar a estos actores sobre la gravedad de las conductas que afectan la integridad y vida de los animales, con el

⁹ Consultado en: <https://www.elcolombiano.com/colombia/maltrato-animal-en-colombia-tiene-a-3-millones-de-perros-y-gatos-en-la-calle-LK20197268>

¹⁰ <https://www.infobae.com/colombia/2024/08/09/abandono-familiar-una-de-cada-diez-mascotas-callejeras-en-bogota-proviene-de-un-hogar/>

evaluaciones de bienestar y 5 conceptos técnicos de bienestar o maltrato [...] Respecto a la clasificación taxonómica de los 196 individuos evaluados, se encontró que el 46% fueron aves, el 32% reptiles el 2% mamíferos y el 20% restante (31 individuos) corresponden a otras clases taxonómicas (tabla 2), de igual manera se discriminan los individuos evaluados por especie para las vigencias 2020 (tabla 3) y 2021 (tabla 4)”.

Tabla 2. Datos Consolidados Gestión Control

Año	Operativos	Visitas	Evaluaciones de Bienestar	Individuos Evaluados	Conceptos Técnicos Emitidos
2020	0	46	34	170	3
2021	16	49	17	26	2
TOTAL	16	95	51	196	5

Imagen 3. Datos Consolidados Gestión Control. Fuente. IDPYBA, rad. Respuesta Radicado 2021ER005621-SDQS 1908012022

En el mismo sentido, la autoridad ambiental con competencia en el Distrito Capital, Secretaría Distrital de Ambiente, mediante respuesta a derecho de petición radicado 2022EE135266 del 03/06/2022, refiere que: “[...] la Secretaría Distrital de Ambiente realiza la recuperación de los especímenes de nuestra fauna silvestre, producto de tráfico ilegal o que se encuentre en situaciones de riesgo o vulnerabilidad, para darles la atención y manejo adecuado, con el objetivo de devolverlos en lo posible, a su hábitat natural. En los casos donde se identifique algún daño o lesión grave que menoscabe la integridad física o emocional del animal o provoque su muerte, se tendrá en cuenta como agravante en los procesos sancionatorios ambientales de carácter administrativo en el marco de la Ley 1333 de 2009 y se remite el caso a la autoridad competente del ámbito penal de acuerdo con la Ley 2111 de 2021”. Así bien, se remiten datos importantes sobre comportamientos ilegales que se cometen contra animales silvestres los cuales se encuentran en las actas de incautación de fauna, que para el año 2021 muestran 292 casos atendidos, mientras que para el año 2022 evidencian un aumento con un total de 904 casos.

4. Disposiciones sobre los delitos contra la vida, la integridad física y emocional de los animales y justificación del aumento de la pena.

A. La prohibición de adquisición, tenencia, cuidado o alberque de animales a cualquier título

<p>Igual como se explicó en el numeral anterior, el artículo 339A del Código Penal establece como penas privativas de otros derechos las siguientes: La inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas; La inhabilitación para el ejercicio de profesión, arte, oficio, industria o comercio, bien sea de forma directa o indirecta en calidad de administrador de una sociedad, entidad sin ánimo de lucro o cualquier tipo de ente económico, nacional o extranjero; la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela y curaduría; la privación del derecho a conducir vehículos automotores y motocicletas; la privación del derecho a la tenencia y porte de arma; la privación del derecho a residir en determinados lugares o de acudir a ellos; la prohibición de consumir bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes o psicotrópicas; la expulsión del territorio nacional para los extranjeros; la prohibición de aproximarse a la víctima y/o a integrantes de su grupo familiar y la prohibición de comunicarse con la víctima y/o con integrantes de su grupo familia.</p> <p>Como se observa, no se contempla en la parte general del Código Penal, como pena privativa de otros derechos, la prohibición de adquisición, tenencia, cuidado o albergue de animales a cualquier título, razón por la cual es importante introducir una modificación en la parte general del Código Penal con el fin de ajustar el contenido del artículo 339A en lo que se refiere a prohibición de tenencia de animales, para que exista coherencia entre la definición especial de los tipos penales y las reglas generales del Código.</p> <p>Tal como se fundamenta la modificación del artículo 8 de la Ley 1774 de 2016, sobre la aprehensión material preventiva con el fin de proteger a los animales al no tener que regresar al cuidado de sus posibles maltratadores, carece de sentido que en el marco del reproche penal de las conductas constitutivas de maltrato animal, que son por sustancia más graves, puedan ser castigadas con penas importantes como la prisión pero que no se imponga una medida accesoría como la prohibición de adquisición, tenencia, cuidado o albergue de animales a cualquier título. En ese sentido, si bien es cierto el artículo 5 de la Ley 1774 de 2016 que adicionó un título (XI-A) al Código Penal, en el nuevo artículo 339A de dicho estatuto, se estableció la pena accesoría de inhabilitación especial de uno (1) a tres (3) años para el ejercicio de profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales, lo cierto es que, en la parte general del código, puntualmente en el artículo 43 relativo a las "penas privativas de otros derechos", no se consagra ninguna pena que permita prohibir la adquisición, el cuidado, el albergue o la misma tenencia de animales a los eventuales responsables de la conducta descrita en el artículo 339A. Incluso, si se mira con detenimiento, el artículo 43 del Código Penal sólo consagra</p>	<p>una pena privativa de derechos de tenencia en el numeral sexto, relativa a la privación del derecho a la tenencia y porte de arma.</p> <p>En consecuencia, como se indicó, si bien el artículo 339A establece una inhabilitación relativa a la tenencia que tenga relación con los animales, es necesario darle coherencia a dicha pena privativa de otros derechos para que quede armonizada con el artículo 43 del mismo estatuto penal, creando la pena de prohibición de adquisición, tenencia, cuidado o albergue de animales a cualquier título, para posteriormente introducir otra modificación en el código con un artículo nuevo, el 50A, en donde se dote de contenido dicha pena estableciendo que la prohibición le impide al penado adquirir, tener, cuidar o albergar a animales por compra, donación, permuta, adopción o sentencia judicial, así como su recepción por prescripción, sucesión por causa de muerte o divorcio. Acto seguido, aunque en la ponencia para primer debate se se introdujo un nuevo inciso al artículo 51 con el fin de entregarle a los jueces penales la posibilidad de maniobra dentro de los mínimos y máximos de la pena por un término de 5 a 7 años, posteriormente y como producto del debate ante la Comisión Primera Constitucional Permanente, dicha prohibición quedó aprobada por el doble de la pena impuesta.</p> <p>Adicional a lo anterior, y en el marco de un análisis de derecho comparado, se puede observar que, en el Código Penal Español, Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, el artículo 337 relativo al delito de maltrato animal establece como pena principal la prisión de tres meses y un día a un año, así como inhabilitación especial para la tenencia de animales, en perfecta coherencia con el artículo 33 en donde se clasifican las penas, que en su numeral 3, literal f, y en el numeral 4, literal c, establece la inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales, así como, con el artículo 39 sobre las penas privativas de otros derechos, que en su literal b consagra precisamente la inhabilitación especial para la tenencia de animales. Por tal motivo, al haberse utilizado dicha legislación como referente para la expedición de la Ley 1774 de 2016, es apenas lógico que se modifiquen los artículos que hacen falta del Código Penal para armonizar el artículo 339A a los artículos mencionados anteriormente de la parte general en donde se enuncian y dotan de contenido las penas privativas de otros derechos.</p> <p>B. Análisis sobre el aumento de las penas por maltrato animal.</p> <p>En el marco del Estado Social de Derecho, el ejercicio del <i>Ius Puniendi</i>, constituye el último recurso del control social necesario para la protección subsidiaria de los</p>
<p>bienes jurídicos. Así, el derecho penal se concibe como instrumento de garantía del ejercicio de los derechos y del goce efectivo de los bienes jurídicos. No obstante, el legislador, en ejercicio de su libertad de configuración legislativa en materia penal, no solo está delimitado por los principios de proporcionalidad, de razonabilidad y de necesidad de las penas, sino que también encuentra en los valores y principios constitucionales, orientaciones y restricciones a dicho ejercicio.</p> <p>Es así como, el deber de protección de los animales frente al maltrato y el sufrimiento se da en el marco de la denominada constitución ecológica, en la cual, se reconoce a los animales el estatus jurídico como sujetos de protección del derecho, debido a su capacidad de sintiencia como valor intrínseco, a su valor moral, ecológico y social, y dado, la relación existente entre la dignidad humana y la protección de los animal conforme al principio constitucional de solidaridad. Deber de protección que ha sido incorporado y desarrollado en el ordenamiento penal colombiano.</p> <p>El artículo 339A del Código Penal establece que, quien por cualquier medio o procedimiento, maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado, causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física, incurrirá en pena de prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses, más la imposición de una serie de penas accesorias. Sin embargo, de conformidad con lo establecido en el artículo 313 de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal), la detención preventiva en establecimiento carcelario procede únicamente para, entre otros, los delitos en en los cuales el mínimo de la pena prevista por la ley sea o exceda de cuatro (4) años, lo que implica que el tipo penal del artículo 339A (maltrato animal) sea, en el lenguaje extrajurídico, excarcelable.</p> <p>Así mismo, y en concordancia con el artículo 63 del Código Penal, cuando la pena mínima del delito no exceda los 4 años, procederá la suspensión de la ejecución de la pena, lo que permite a quien ha sido condenado a una pena privativa de la libertad, que se suspenda por un determinado período la sanción de privación de la libertad impuesta por el juez. Todo esto implica que, en realidad, los delitos contra los animales, por más gravedad que conlleven, no tienen ningún tipo</p>	<p><u>de reproche penal significativo o disuasivo, pese al estatus constitucional y el deber legal de protección del que han sido sujetos de reconocimiento.</u></p> <p>Ahora, si bien es cierto que actualmente el Estado carece de una política pública en materia criminal y carcelaria que permita solucionar los problemas de hacinamiento de las cárceles, la reincidencia, los vencimientos de términos y en general la efectiva administración de justicia, también lo es, que la creación de un tipo penal autónomo que proteja la vida e integridad de los animales por sí mismos, y de manera independiente de la utilidad que le reporten al ser humano, supone una importancia tal en la sociedad que su sanción vía reproche penal no puede hacer nugatorio el deber constitucional de protección animal, lo que actualmente sucede con la posibilidad de excarcelar a los autores y partícipes de la comisión de este tipo de delitos, con lo que se desdibuja la importancia del tipo penal.</p> <p>En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la función resocializadora de la pena, como es el caso de la sentencia C-026 de 2016 en la que manifiesta:</p> <p><i>"[...] las amplias atribuciones reconocidas a favor del Estado en el contexto de la "relación de especial sujeción", materializadas en la posibilidad de restricción de los derechos de los reclusos, encuentran plena justificación en el hecho de que ellas se conviertan en mecanismos idóneos para "hacer efectivos los fines esenciales de la relación penitenciaria, esto es, la resocialización del interno y la conservación del orden, la disciplina y la convivencias dentro de las prisiones"[18]. Dentro de esa orientación, ha sostenido igualmente que "el concepto de resocialización se opone no solo a la imposición de penas que conlleven tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, sino también a todas las condiciones de cumplimiento de la pena que sean desocializadoras"[19], entendiéndose que corresponde al Estado proveer los medios y las condiciones que posibiliten las opciones de inserción social de la población reclusa, y a los propios reclusos, en ejercicio de su autonomía, fijar el contenido de su proceso de resocialización".¹¹</i></p> <p><small>¹¹Corte Constitucional. Sentencia C-026 de 2016. M.P. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ. Recuperado en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-026-16.htm</small></p>

No obstante, lo anterior no es óbice para que el legislador determine en el marco de su libertad de configuración legislativa, los casos concretos en los cuáles deba proceder la detención preventiva en establecimiento carcelario de conformidad con la gravedad de la conducta, del daño causado, y la consecuente afectación moral y social que revisten ciertas conductas, que incluso, normalizan formas de violencia y degradación que escalan hacia la violencia interpersonal.

En ese sentido, teniendo presente que la Ley 1774 de 2016, consagró el tipo penal autónomo de maltrato animal, reconociendo la vida y la integridad física y emocional de los animales, como un bien jurídico tutelado, cuya protección es exigible por los medios coercitivos del derecho. Este avance, permitió reflejar que los animales constituyen una parte fundamental de nuestra sociedad y que existe una cada vez más creciente preocupación en las personas sobre el respeto y la protección que debemos a los animales y su integridad, razón por la cual, el derecho ha venido evolucionando y desarrollándose de conformidad con la renovada comprensión sobre las vidas animales.

En este sentido, corresponde al Congreso de la República, realizar cambios progresivos sobre el alcance del tipo penal de maltrato animal y propender por el aumento proporcional y razonado de la pena, de modo que la sanción penal sea congruente no solo con la preocupación y reproche social amplio frente al fenómeno del maltrato, sino también, con los fines del derecho penal y los valores y principios constitucionales,

Como se mencionó con anterioridad, actualmente el delito contra el maltrato animal tiene una pena de prisión de 12 a 36 meses para quien cause la muerte o lesione gravemente a un animal. En la presente ponencia se plantea: i) dividir el delito para que la muerte y las lesiones sean sancionadas por separado, ii) aumentar la pena de cada hecho delictivo. En el caso de la muerte se pretende que la pena sea de 32 a 56 meses y para las lesiones graves se concibe una pena de de 20 a 42 meses.

La anterior propuesta se justifica como se expone a continuación.

i) Dividir el delito para que la muerte y las lesiones graves sean sancionadas por separado.

En primer término, se propone modificar el delito consagrado actualmente en el artículo 339A del Código Penal, mediante la separación de las conductas que resultan en muerte y aquellas que constituyen lesiones graves, ya que actualmente los dos hechos se sancionan con la misma pena. Este cambio responde al llamado de los Senadores de la Comisión Primera Constitucional Permanente quienes acertadamente argumentaron en el primer debate, que dicha distinción permitiría una mayor precisión en la tipificación de la conducta y una graduación proporcional de las penas alineada con la misma, promoviendo así una respuesta punitiva más justa. Así mismo, este cambio busca seguir los principios del derecho penal, tal como sucede con los delitos contra las personas, en los que las lesiones personales tienen una sanción diferente al homicidio, pues **la muerte del animal debe recibir un mayor reproche penal que el maltrato que resulta en lesiones, dado que la afectación al bien jurídico protegido que es la vida del animal, es de mayor magnitud.**

ii) Aumentar la pena para cada hecho delictivo (muerte y lesiones graves).

Para entrar a exponer el segundo cambio pretendido en este proyecto de ley, es decir, el aumento de la pena para cada conducta punible, resulta necesario recapitular y evaluar el desarrollo, la evolución e impacto que ha tenido el tipo penal original, para así, avanzar hacia una nueva configuración del tipo penal que permita la salvaguarda efectiva del bien jurídico tutelado, es decir la vida, la integridad física y emocional de los animales.

Para esto, buscaremos demostrar a continuación que, desde diferentes enfoques, es posible afirmar que luego de pasados casi 10 años desde la creación del delito, se evidencia que:

- A) La pena establecida no ha sido suficiente para garantizar el bien jurídico tutelado.
- B) La norma actual puede ser desproporcionadamente baja respecto de otros delitos que podrían considerarse similares o menos graves en su resultado.
- C) La propuesta de aumento de la pena es legítima y reviste importancia para la sociedad.

D) La pena actual pone en riesgo no solo a los animales sino también a la sociedad.

A). La pena establecida no ha sido suficiente para garantizar el bien jurídico tutelado.

Según la Unidad de Desarrollo Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura, en respuesta a derecho de petición elevado desde la Unidad de Trabajo Legislativo¹², se informa que desde el año 2020 y con corte a 2024, en el país han sido condenadas por el delito de maltrato animal un total de 169 personas. Sin embargo, durante estos mismo años, se han recibido aproximadamente 10.963 denuncias, según lo reportado por el Grupo Especial para la Lucha Contra el Maltrato Animal -GELMA. Estas cifras revelan un escaso índice de condenas de apenas el 1.5% , lo que ha generado en la ciudadanía la percepción de impunidad en casos aberrantes de maltrato animal.

Así mismo, a pesar de que la Ley 1774 de 2016 modifica el Código Penal para incluir el delito 339A (delitos contra la integridad física y emocional de los animales), lo cierto es que podría afirmarse, que la pena establecida en dicha ocasión, es decir de 12 a 36 meses de privación de la libertad, no ha tenido un impacto significativo en la prevención de la conducta ni en la reducción del delito, como tampoco ha tenido un efecto disuasivo frente a los posibles infractores. Lo anterior, se evidencia en que desde la entrada en vigencia de la ley, en lugar de disminuir los casos de maltrato animal, estos han venido aumentando, como se muestra con el incremento de denuncias, de imputaciones y de condenas por año, como se verá seguidamente.

La Fiscalía General de la Nación, en respuesta a derecho de petición radicado por el equipo de la Unidad de Trabajo Legislativo¹³, nos informó que desde la entrada en vigencia la Ley 1774 de 2016 que penaliza los actos que atentan contra la vida y la integridad física del animal, se han presentado aproximadamente 16.000 denuncias, discriminadas de la siguiente manera:

¹² Respuestas a derecho de petición con radicado UDAEO23-883 y PCSJO25-65 del 11 de abril del 2022 y 10 de febrero del 2025 respectivamente.
¹³ Respuesta a derecho de petición con radicado Oficio No. 063 del 20 de febrero de 2025.

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
835	1060	1144	1211	1331	1753	2718	2528	2633	92

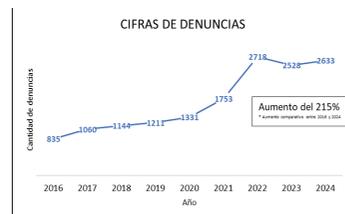
Así mismo, respecto del número de imputaciones por este delito, se nos informa en la misma respuesta:

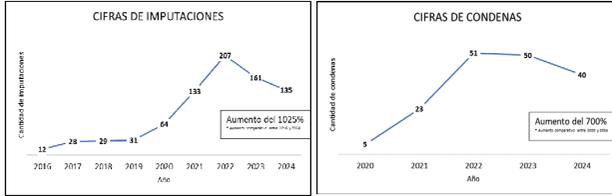
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12	28	29	31	64	133	207	161	135	13

De igual forma, al analizar las cifras de condena por este delito, discriminadas por año, tenemos que:

AÑO	Número de personas condenadas
2020	5
2021	23
2022	51
2023	50
2024	40
Total:	169 personas condenadas

Las anteriores cifras arrojan en cada ítem un incremento en los siguientes porcentajes:





A partir de las cifras disponibles, se evidencia que, aunque el interés de la ciudadanía por reportar y denunciar casos de maltrato animal ha experimentado un crecimiento significativo, y a pesar del esfuerzo de la Fiscalía General de la Nación y de la Rama Judicial para tutelar la vida e integridad de los animales, **no se observa una reducción en la comisión de este delito luego de una década de creado el mismo. Por el contrario, se registra un aumento sostenido de las denuncias, imputaciones y condenas por maltrato animal.** Dinámica de comportamiento en la ocurrencia de este delito que permite inferir que la pena establecida actualmente de 12 a 36 meses de prisión, no cumple con su función preventiva ni pedagógica, y que no resulta suficiente para disuadir de manera eficaz a los posibles infractores.

Lo anterior se explica en que, en la práctica, la tasación punitiva vigente tiene un efecto limitado, toda vez que la pena permite la aplicación sistemática de la figura de la Suspensión de la Ejecución de la Pena, prevista en el artículo 63 del Código Penal, la cual opera en delitos con penas inferiores a los 48 meses, permitiendo que el condenado evite la privación de la libertad a cambio de cumplir con obligaciones irrisorias como informar los cambios de residencia, mantener buena conducta o no salir del país sin autorización previa.

Ahora bien, aunque estas medidas tienen como fin facilitar la reinserción social de la persona, en el caso del maltrato animal resultan insuficientes para generar un efecto disuasorio tanto en el infractor como en otros posibles maltratadores de animales, adicionalmente, la insignificancia de la pena lesiona la moral de la

sociedad, quienes pueden ver inútiles sus esfuerzos por denunciar este tipo de conductas.

B). La norma actual puede ser desproporcionadamente baja respecto de otros delitos que podrían considerarse similares o de menor gravedad en su resultado.

Al hacer una comparación de los delitos contra los animales, respecto de otros delitos que podrían considerarse similares o menos graves en su resultado, se observa que, la norma actual puede ser desproporcionadamente baja respecto de esas otras conductas punibles. Se presentan algunos ejemplos de ello:

- **Abigeato, artículo 243 del Código Penal:**

El abigeato es un delito que se configura con el hurto de animales de las especies bovinas, porcinas y caprinas, y conlleva una pena privativa de libertad base de 60 a 120 meses. Aunque el bien jurídico protegido en este tipo penal no es directamente la vida o el bienestar del animal sino el patrimonio económico de las personas, es viable afirmar que se crea de manera indirecta una protección sobre el animal al establecer la prohibición sobre el hurto de estas especies. Sin embargo, al compararlo con el delito de maltrato animal, tipificado en el artículo 339A del Código Penal, resulta evidente que el abigeato es una conducta menos violenta y lesiva para los animales, ya que el maltrato animal incluye acciones como la muerte o lesiones que afectan gravemente la salud de un animal.

Además, el delito de abigeato otorga una protección especial únicamente a ciertas especies de animales, específicamente aquellas de interés pecuario. Esto se evidencia en el numeral 2 del artículo 243A, donde se establece como agravante del abigeato el sacrificio del animal, lo que puede aumentar la pena mínima a 90 meses. En otras palabras, el ordenamiento penal colombiano considera más grave el hurto y el sacrificio de animales de producción pecuaria que el maltrato o la muerte de otras especies, como los animales domésticos o de compañía.

Esta distinción genera un trato desigual en la protección jurídica de los animales, privilegiando a las especies bovinas, porcinas y caprinas sobre el resto. Mientras que el abigeato recibe una sanción más severa, el maltrato animal, que puede implicar acciones más crueles y dañinas, no recibe el mismo nivel de atención penal,

lo que refleja una disparidad injustificada en la valoración de la vida y el bienestar animal según su especie y su fin económico.

El anterior análisis no pretende concluir que el Abigeato debe desaparecer del ordenamiento penal colombiano o reducir sus penas, sino por el contrario, lo que se busca es demostrar que, el aumento de la pena para el delito de maltrato animal es justificable, pues tiene como fin ampliar el espectro de protección sobre todas las especies de animales, y equilibrar proporcionalmente la sanción penal entre uno y otro tipo respecto de la gravedad del daño ocasionado al bien jurídico tutelado.

DELITO	PENA BASE SIN AGRAVANTES	APLICA DETENCIÓN PREVENTIVA	APLICA SUSPENSIÓN DE LA PENA
Abigeato	60 a 120 meses	SÍ	NO
delitos contra la vida e integridad de los animales.	12 a 36 meses	NO	SÍ

- **Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, artículo 328 y siguientes**

De igual manera, con la expedición de la Ley 2111 de 2021, se introdujo en el Código Penal un capítulo específico dedicado a los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Con los tipos penales dentro de este capítulo, se pretendió, entre otros objetivos, la conservación y protección de las especies de animales pertenecientes a la fauna silvestre. En este sentido, se establece que el aprovechamiento ilícito o el tráfico de animales silvestres conlleva una pena base que oscila entre 60 a 135 meses de prisión. Además, la norma prevé agravantes específicos, como el aumento de la pena cuando en la comisión de una conducta delictiva se cercenan y comercializan las aletas de tiburones, rayas y quimeras.

Así como acontece con el ejemplo del abigeato, la comparación de estas conductas punibles frente al delito que sanciona el maltrato animal, demuestra que existe una disparidad en la protección jurídica de los animales. Mientras que los delitos contra la fauna silvestre cuentan con penas más severas, en el artículo 339A del Código Penal, que incluye la protección de otras especies de animales diferentes a las silvestres, se refleja un tratamiento menos riguroso. Esta diferencia normativa

genera desigualdad en la tutela jurídica de las distintas especies de animales, dejando en desventaja a los animales domésticos de compañía, cuya protección se limita al marco establecido en el mencionado artículo 339A.

DELITO	PENA BASE	APLICA DETENCIÓN PREVENTIVA	APLICA SUSPENSIÓN DE LA PENA
Aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables	60 a 135 meses	SÍ	NO
Tráfico de fauna.	60 a 135 meses	SÍ	NO
Delitos contra la vida e integridad de los animales.	12 a 36 meses	NO	SÍ

Los anteriores ejemplos que comparan la pena del abigeato y de los delitos contra los recursos naturales, frente a la pena del delito contra la vida e integridad de los animales, permiten observar el déficit de protección integral de los animales. La anterior disparidad en la tutela del bien jurídico protegido, se da, pese a que el mandato constitucional de protección animal no discrimina entre especies, sino que, por el contrario, como se deriva de la constitución ecológica de 1991, la protección del ambiente conlleva la protección de la fauna, de la cual, hacen parte todos los animales, tal y como se aprecia a continuación:

"(...) El ambiente como concepto protegido por la Constitución Política, incluye a la fauna, esto es, a los animales. Su protección a nivel legal se encuentra en la Ley 84 de 1989. En dicha norma se estipuló que los animales tendrán especial protección contra el sufrimiento y el dolor, causados directa o indirectamente por las personas. Posteriormente se expidió la Ley 1774 de 2016, cuyo propósito era prohibir el maltrato animal para ello, entre otras cosas, consagró como premisa fundamental el reconocimiento de los animales como seres sintientes"^[20].

"(...) A partir de una Constitución comprometida con el medio ambiente, de instrumentos normativos e internacionales sobre su protección y de una realidad que tiene que ver con la existencia un país megadiverso^[20], la Corte Constitucional ha consolidado una línea jurisprudencial en distintos escenarios medioambientales, entre ellos, en el relacionado con la prohibición de maltrato a los animales, en tanto integrantes del recurso

faunístico de los ecosistemas¹²¹ y cuya consideración es necesaria e imperiosa en el marco de la Constitución ecológica".¹⁴

Esta situación, pone de manifiesto la necesidad de revisar y fortalecer el marco normativo en materia penal para asegurar una protección equitativa y efectiva de todos los animales, sin distinción de su especie o su significancia económica.

- Análisis de los delitos contra la vida y la integridad de un animal, respecto del homicidio y las lesiones personales en humanos:

Este proyecto de ley representa un avance significativo en la protección de la vida y el bienestar de los animales, sin que ello implique equiparar o igualar las sanciones aplicables a los delitos que tutelan bienes jurídicos propios de los seres humanos, como la vida y la integridad personal. **Es fundamental aclarar que el aumento de la pena por maltrato animal no busca homologar la protección jurídica de los animales con la de las personas, sino fortalecer el marco normativo para garantizar una tutela efectiva y proporcional frente a conductas que atentan contra la vida de los animales o promueven su sufrimiento.**

En el ordenamiento jurídico colombiano, los delitos contra la vida y la integridad de las personas, como el homicidio y las lesiones personales, tienen un tratamiento penal severo, acorde con la gravedad de los bienes jurídicos que protegen. Por ejemplo, el artículo 103 del Código Penal establece que quien cometa homicidio incurrirá en una pena de prisión de 208 a 450 meses, la cual se agrava a 480 a 600 meses si la víctima es un menor de 18 años. Además, el Código Penal contempla circunstancias de agravación punitiva que refuerzan la protección de la vida humana, incluso en su modalidad culposa. Estas disposiciones reflejan el valor primordial que la Constitución y el ordenamiento jurídico otorgan a la vida humana.

Por su parte, el presente proyecto de ley busca sancionar el maltrato animal de manera proporcional, razonada y efectiva, sin equipararse con los delitos contra la vida e integridad de las personas como desde algunas comprensiones erradas suele criticarse. Cabe resaltar que **no todas las conductas que causan la muerte de un**

¹⁴ Sentencia T 142 de 2023, MP. José Fernando Reyes Cuartas

animal son penalizadas, sino únicamente aquellas que implican un acto de maltrato animal realizado con dolo, es decir, con intención de causar sufrimiento o daño. Esto demuestra que el derecho penal no pretende otorgar a los animales el mismo estatus jurídico que a los seres humanos, sino sancionar conductas que atentan contra su bienestar e integridad y que, por su crueldad, merecen una respuesta más contundente por parte del Estado.

En este sentido, se propone aumentar a 32 meses la pena mínima para quienes maltraten a un animal y le causen la muerte. Este ajuste no busca igualar las penas de los delitos contra las personas, sino dotar a los operadores judiciales de herramientas jurídicas suficientes para aplicar la norma de manera eficiente y superar las dificultades que actualmente impiden una justicia efectiva. La pena vigente, como se ha evidenciado, resulta desproporcionadamente baja frente a la gravedad de los casos de maltrato animal que ocurren en el país, lo que limita la capacidad del sistema para disuadir estas conductas y proteger adecuadamente a los animales.

DELITO	PENA
Homicidio	208 a 450 meses
Homicidio en niño, niña o adolescente	480 a 600 meses
Delito actual contra la vida y la integridad de los animales	12 a 36 meses
Propuesta proyecto de ley del delito de maltrato cuando cause la muerte.	32 a 56 meses

Del mismo modo, al contrastar el tratamiento penal de las lesiones personales en seres humanos con el delito de maltrato animal, se evidencia una diferenciación justificada en la protección jurídica, acorde con la jerarquía de bienes tutelados. En el caso de las lesiones personales contra humanos, el artículo 116 del Código Penal colombiano sanciona incluso aquellas conductas que no generan una afectación grave a la salud, con penas que oscilan entre 16 y 36 meses de prisión. Esto refleja el amplio espectro de protección que el ordenamiento jurídico otorga a la integridad personal, un bien jurídico de carácter fundamental.

Por el contrario, el delito de maltrato animal sólo penaliza las lesiones que **menoscaben gravemente** la salud o integridad del animal, como mutilaciones, daños orgánicos irreversibles o sufrimiento severo¹⁵. Es decir que las lesiones leves derivadas del maltrato animal no se tramitan por la vía penal, sino que se tipifican como contravenciones, resueltas administrativamente por inspectores de policía. Esta distinción subraya que el derecho penal actúa como *última ratio* en la protección de los animales, reservándose para casos de especial gravedad, sin homologar su estatus al de las personas.

En el ámbito de las lesiones personales contra humanos, la pena se gradúa según la magnitud del daño: desde afectaciones transitorias hasta la pérdida definitiva de un órgano o función anatómica. Por ejemplo, el artículo 116 del Código Penal establece penas de 96 a 180 meses de prisión cuando hay pérdida de la función de un órgano, agravándose hasta una tercera parte cuando haya pérdida anatómica del órgano o miembro. Este escalonamiento refleja un sistema proporcional a la gravedad del bien jurídico afectado.

En el caso del maltrato animal, el proyecto de ley propone aumentar la pena para las lesiones graves de 12-36 meses a 20-42 meses. Este ajuste no equipara en manera alguna el tratamiento jurídico de los animales con los humanos, sino que, busca dotar de herramientas más efectivas a los operadores judiciales, garantizando una respuesta proporcional a la crueldad intrínseca de estos actos. La pena actual (12-36 meses) resulta insuficiente frente a casos extremos, como mutilaciones, o daños orgánicos irreparables en animales producto de la sevicia o el abuso sexual, los cuales, aunque no igualan el valor de la vida humana, requieren una sanción acorde con su impacto social y sobre los animales.

DELITO	PENA
Lesiones personales que causan incapacidad para trabajar o enfermedad menor a 30 días	16 a 36 meses
Lesiones leves (las que NO menoscaban)	No es considerado un delito, su sanción es policiva.

¹⁵ Sentencia C-041 de 2017, MP. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, JORGE IVÁN PALACIO PALACIO "Si bien no todos los actos de crueldad suponen al mismo tiempo un 'menoscabo grave' de la salud o la integridad, es correcto concluir que quedan comprendidos por dicha descripción los que supongan (i) herir a un animal por golpe, quemadura, cortada o punzada o con arma de fuego -literal a-, (ii) remover, destruir, mutilar o alterar cualquier miembro, órgano o apéndice de un animal vivo, sin que medie razón técnica..."

gravemente la salud o integridad del animal)

DELITO	PENA
Lesiones personales que causen pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro.	96 a 180 meses
Delito actual: maltrato que cause lesiones que menoscaben gravemente la salud o integridad del animal.	12 a 36 meses
Propuesta proyecto de ley: maltrato que cause lesiones que menoscaben gravemente la salud o integridad del animal.	20 a 42 meses

C). La propuesta de aumento de la pena es legítima y reviste importancia para la sociedad.

En este punto es importante mencionar que, la sociedad, desde la década de los 60 y 70 ha demostrado un interés general por querer transformar el relacionamiento con los animales y los ecosistemas, así lo reflejan autores Rachel Carson y Peter Singer, autores que en su momento cuestionaron la manera en que los seres humanos se relacionaban con el planeta y los animales. De esta manera, se motivaron distintas sociedades por la creación de partidos políticos¹⁶ en defensa de los derechos de los animales, caso Europa, donde un número importante de organizaciones con distintos enfoques misionales en lo que respecta a la defensa de las diferentes especies de animales se fueron conformando, algunas de ellas en la actualidad con representación en Colombia; este comportamiento social ha exigido el crecimiento normativo en el mundo, así como el clamor por mitigar la impunidad frente a los delitos con los animales. Una realidad que ya no se puede negar.

Lo anterior, infiere que durante décadas la sociedad ha decidido ampliar su círculo moral y ético en lo que respecta a los animales como consecuencia de la injusticia y el trato violento al que están sometidos y expuestos estos seres constantemente.

¹⁶ Parti Animaliste en Francia y Partij voor de Dieren en los Países Bajos

Este cambio social se sustenta en tres aspectos fundamentales, i) el aumento del activismo por la defensa animal y sus diferentes formas organizativas; ii) la búsqueda por el avance normativo y iii) la disposición de la administración pública con la puesta en marcha de proyectos y recursos, todo en miras a la defensa y la protección animal.

i) Aumento del activismo por la defensa de los animales en Colombia

En el país, la primera ONG es la Asociación Defensora de Animales y del Ambiente (ADA) en 1964, la cual estaba acompañada de unas pocas organizaciones que lideraron procesos para la sustitución de vehículos de tracción animal, la prohibición del uso de animales en circos y el activismo por la defensa de los perros y gatos en abandono. Posteriormente, se dio la aprobación de la Ley 5 de 1972 con el objeto de crear las Juntas Defensoras de Animales (JDA) en todos los municipios del país, figura jurídica que materializó una de las formas de participación ciudadana en los asuntos de bienestar animal. Esta conformación se hizo de manera pausada¹⁷, por lo menos así se observa entre el análisis hecho por la Universidad CES que en 2020 informa que para la fecha existían no más de 30 JDA en Antioquia, y en el resto del país con mucha dificultad, mientras que para el 2023, mediante un sondeo ciudadano realizado por la Unidad de Trabajo Legislativo se observó que la conformación de juntas defensoras de animales aumentó a 102 instancias en 27 departamentos.

Aunado a lo anterior, otro aspecto que refleja un aumento en la participación ciudadana por la defensa de los animales se da con el incremento del número de denuncias contra el maltrato animal año tras año, esto comparado con el bajo número de imputaciones de cargos y condenas despierta una fuerte indignación, lo cual genera que en muchos casos sea la misma ciudadanía quien rescate y salvaguarde la vida del animal debido a la gravedad de los actos violentos, la falta de albergues municipales o centros de bienestar animal y la escasa presencia de la

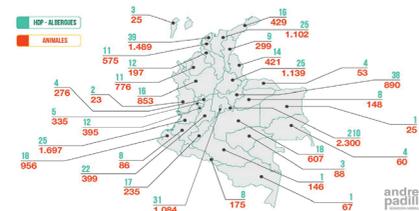
¹⁷ https://www.researchgate.net/publication/355929655_Juntas_Defensoras_de_Animales_del_papel_a_la_realidad_operativa

institucionalidad, en especial, en los municipios de categoría 4, 5 y 6 que son aproximadamente cerca de 1.000, es decir, por lo menos el 90% del país.



Fuente: Grupo CELMA - Fiscalía General de la Nación. Unidad de Desarrollo Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura

Así las cosas, en Colombia se observa que hay más hogares de paso y albergues privados que centros de bienestar animal y son las personas particulares y fundaciones u hogares de paso quienes terminan recibiendo a los animales víctimas de maltrato, por eso, son quienes se suman al llamado para el endurecimiento de penas, toda vez que conocen la problemática de primera mano, además de financiar con recursos propios la manutención de los animales rescatados que en ocasiones son también entregados por las mismas administraciones municipales.



Fuente: Unidad de Trabajo Legislativo, senadora Andrea Padilla con corte 30 de diciembre de 2023

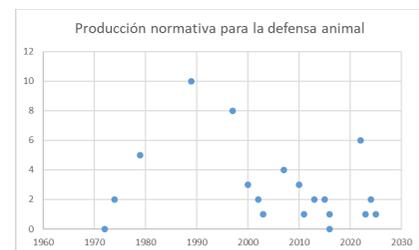
Esta ineficiencia de las autoridades judiciales encargadas de sancionar el maltrato animal, genera en la ciudadanía una creciente sensación de impunidad y falta de justicia frente a este fenómeno, el cual adquiere cada vez mayor relevancia en la sociedad colombiana. Esto se debe, en parte, a que cerca del 70% de los hogares colombianos cuenta con al menos un animal de compañía¹⁸, lo que ha fortalecido la conciencia social y el rechazo hacia toda forma de violencias contra los animales.

En este contexto, la sociedad directamente afectada por la debilidad de las penas establecidas para este delito, exige a las autoridades públicas la implementación de medidas más severas que no solo contribuyan en la reducción del delito, sino que envíen un mensaje claro que estas conductas crueles e inhumanas merecen un reproche penal proporcional a su gravedad. Muestra de esta exigencia social es la recolección de miles de firmas a través plataformas como Change.org, donde los ciudadanos han instado al legislador a endurecer las penas contra el maltrato animal, reflejando así un consenso social sobre la necesidad de una mayor protección jurídica para los animales con un recaudo con corte al 20 de febrero de 2025 de 66.124, cifra que va en aumento. <https://chnq.it/kFLDMtwWcs>

ii) La búsqueda por el avance normativo para la protección de los animales

De acuerdo con lo anteriormente manifestado, se puede observar que de manera proporcional al aumento en el activismo por la defensa animal se genera una mayor producción legislativa a partir del año 2000 en el Congreso de la República y la Corte Constitucional, esto, como consecuencia, también, del fortalecimiento organizativo del movimiento ciudadano y la puesta en escena a través de marchas y plantones en los lugares donde presuntamente ocurrieron hechos de maltrato animal, así como, la búsqueda por la incidencia política ante los entes territoriales y el Congreso.

¹⁸ Consultado en: <https://cambiocolombia.com/mascotas/economia-mascotas-mercado-perros-gatos-colombia>
¹⁹ Ley 5 decreto 497 de 1972, Decreto ley 2811 de 1974, Ley 9 de 1979, Ley 84 de 1989, Sentencia T- 035 de 1997, Ley 576 de 2000, Ley 746 de 2002, Resolución 02601 de 2003, Sentencia T- 760 de 2007, Sentencia C- 666 de 2010, Ley 089 de 2011, Ley 1638 de 2013, Ley 1753 de 2015 (PND) Artículo 248, Ley 1774 de 2016, Ley 1801 de 2016, Ley 2054 de 2022, Ley 2294 de 2023, Ley 2374 de 2024



Fuente: elaboración propia a partir de información recopilada en Rev.MVZ Córdoba vol.25 no.2 Córdoba May/Aug. 2020 Epub Aug 29, 2021

iii) La administración pública con la puesta en marcha de proyectos y recursos

De acuerdo con las siguientes cifras reportadas por la Fiscalía General de la Nación con corte al 2024, que identifican las ciudades con más denuncias por maltrato animal:

Seccional	# casos
Bogotá	2112
Cundinamarca	1903
Medellín	1053
Santander	960
Boyacá	757
Cali	738
Antioquia	721

DPTOS / CAPITAL	Esterilización	CBA	CAVR - CAV	Con equipo PVBA	Denuncias
BOGOTÁ	Si	Si	Si	Si	2.112
CUNDINAMARCA	Si	No	Si	Si	1.903
ANTIOQUIA	Si	Si	Si	Si	1.774
SANTANDER	Si	Si	Si	No	960
BOYACA	Si	No	Si	No	757
VALLÉ DEL CAUCA	Si	Si	Si	Si	738

Se observa que la presencia de la institucionalidad tampoco es garantía para mitigar el maltrato animal, curiosamente, **las ciudades con algún programa o infraestructura para la atención de casos y lucha contra el maltrato animal, son las que más denuncias reportan**, por lo que es posible afirmar que, a pesar de la inversión de recursos por parte de las entidades territoriales para atender el fenómeno del maltrato animal esto no es garantía para reportar una disminución significativa en la comisión del delito en dichos territorios, lo que refuerza el planteamiento de la necesidad de reevaluar la pena del delito de maltrato animal, con el fin de hacer más severas las sanciones vía derecho penal.

D). La pena actual pone en riesgo no solo a los animales sino también a la sociedad.

La violencia es un fenómeno estructural, al interior del cual, se alinean diferentes elementos, símbolos, dispositivos sociales, y estructuras culturales e institucionales, que explican el carácter interrelacional que existe entre diferentes formas de crueldad, insensibilidad y violencia. Existe un vínculo innegable entre la crueldad con animales y la violencia infligida sobre humanos.

Se encuentra ampliamente documentado que una persona que comete actos de maltrato animal es un potencial agente que replica conductas violentas con mujeres y niños, tal y como ocurre con determinadas formas de violencia intrafamiliar, en la que se ejerce maltrato a los miembros de la familia través del maltrato vicario ejercido sobre sus animales de compañía.

Al respecto, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal –IDPYBA, mediante la creación de las Redes de Género y Protección Animal, ha investigado, sistematizado y caracterizado el fenómeno de la "violencia interrelacionada". Trabajo mediante el cual se ha establecido que: *"el maltrato animal se ha convertido en un indicador para prevenir la violencia de género. La violencia intrafamiliar, orientada la mayoría de las veces hacia las mujeres, demuestra que las amenazas con maltrato los animales de compañía, es una estrategia de poder ampliamente utilizada por hombres para someter a esposas, parejas, hijos e hijas"*²⁰.

²⁰ Recuperado en: <https://www.animalesbog.gov.co/noticias/la-violencia-g%C3%A9nero-y-su-relaci%C3%B3n-maltrato-anim>

que la crueldad hacia los animales indica que se están produciendo otros posibles delitos en el hogar.²³

Gracias a un estudio de la Unidad de Análisis de Conducta del FBI, se evidenció que, **de 259 casos activos de maltrato animal, el 60% de los agresores habían sido detenidos por violencia de pareja**²⁴. En otros estudios se ha demostrado que la mitad de los niños están expuestos a la crueldad animal en algún momento de su vida, y que en estas circunstancias, se aumenta el riesgo de que los niños perpetúen el ciclo de violencia en el futuro debido a la insensibilización y a la creencia de que la violencia es una forma aceptable de resolver los conflictos interpersonales.

El maltrato animal no solo vulnera la integridad del animal, sino que también tiene implicaciones sociales profundas, pues se normalizan conductas violentas y degradantes que pueden escalar hacia otras formas de violencia interrelacionada. Se ha dicho que el derecho penal debe cumplir una función preventiva, no sólo retributiva. **Por lo anterior, la gravedad del maltrato animal y su incidencia en otras formas de violencia interrelacionada, justifica el aumento proporcional de la pena para este delito, de modo que pueda cumplirse su finalidad disuasoria y pedagógica, protegiendo no solo a los animales sino a la sociedad en general.**

En conclusión y teniendo en cuenta el análisis presentado desde diferentes enfoques sobre la deficiencia en la pena actual de la pena del delito fijada en el artículo 339A, encontramos justificable y proporcional proponer en la presente iniciativa el aumento de penas de manera que quien cause la muerte a un animal enfrente una pena de prisión de 32 a 56 meses, mientras que quien provoque lesiones que menoscaben gravemente la salud o integridad física del animal, será sancionado con una pena de 20 a 42 meses. Esta modificación implica que, para el caso de muerte, la pena mínima se aumenta al doble de la consagrada en el ordenamiento jurídico actual y en el caso de las lesiones graves, se incrementará

²³ Consultado en: <https://leb.fbi.gov/articles/featured-articles/the-link-between-animal-cruelty-and-human-violence> *The Link Between Animal Cruelty and Human Violence*.

²⁴ Hoffer, et al. (2018). "Violence in Animal Cruelty Offenders".

En el contexto de la violencia de género el maltrato animal es un indicador para la prevención y el abordaje de este fenómeno, puesto que se ha establecido, que los agresores también maltratan a los animales para coaccionar, intimidar, silenciar y/o manipular a sus víctimas humanas y que **las mujeres cuyos animales son amenazados o maltratados son siete veces más propensas a señalar que la preocupación por sus animales retrasó su decisión de dejar a sus parejas abusivas.**

Desde el ámbito de la sociología comparada, tiene lugar hacer referencia a diferentes estudios que han abordado este fenómeno de la violencia interrelacionada. **El 75% de las mujeres maltratadas que tienen animales de compañía declaran haber sufrido amenazas o daños intencionados por parte de su pareja, y los niños están presentes y son testigos de la violencia en más del 90% de los casos**²¹.

Así mismo, de acuerdo con Campbell²², los delitos de violencia doméstica no sólo se producen en el entorno de la pareja, sino que a menudo ocurren simultáneamente o son precursores de otros tipos de delitos violentos. **La crueldad hacia los animales es un factor predictivo de la violencia actual y futura, incluidos los delitos de asalto, violación, asesinato, incendio provocado, violencia doméstica y abuso sexual de menores.** Por ejemplo, la mayoría de las víctimas de violencias interrelacionadas declaran haber sufrido crueldad hacia sus animales y también temen que el maltratador acabe matándolas, por lo que se debe considerar que corren un riesgo extremadamente alto de sufrir lesiones graves o la muerte.

De acuerdo con el *Law Enforcement Bulletin* del FBI, **la crueldad hacia los animales es un mejor predictor de abuso sexual en comparación con un historial de homicidio, incendio provocado o condenas por armas**, por lo que ser consciente de este vínculo permite que las autoridades policiales reconozcan

²¹ Shelby McDonald et al., "Intimate Partner Violence Survivors' Reports of Their Children's Exposure to Companion Animal Maltreatment: A Qualitative Study," *Journal of Interpersonal Violence* 34, no. 13 (July 2019): 2627-2652, accessed January 26, 2021, <https://doi.org/10.1177/0886260516689775>.

²² Andrew M. Campbell et al., "Intimate Partner Violence Survivors' Reports of Their Children's Exposure to Companion Animal Maltreatment: A Qualitative Study," *Journal of Interpersonal Violence* 34, no. 13 (July 2019): 2627-2652, accessed January 26, 2021, <https://doi.org/10.1177/0886260516689775>.

en 8 meses. Dichos ajustes buscan un mayor reproche acorde a la gravedad de la conducta pero respetando los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la determinación de las penas.

Adicionalmente, respecto del aumento de la pena para el delito de maltrato que cause la muerte del animal, este ajuste normativo se fundamenta en mantener el delito como "excarcelable" en su forma básica y así mismo que la ejecución de la pena pueda ser suspendida, pero, al imputarse agravantes como la muerte del animal con sevicia, o si la muerte del animal se da através del abuso sexual de este, la pena mínima se elevaría a 48 meses. Con ello, se persiguen dos resultados principales:

1. **obtener una medida de aseguramiento:** Pues al tratarse de un delito cometido con altos niveles de violencia (agravantes), se cumpliría con el requisito de los 48 meses de pena mínima establecido en el artículo 313 del Código Procesal Penal (CPP), lo que permitiría a la Fiscalía solicitar la detención preventiva del imputado y así reducir los riesgos para la sociedad de tener en libertad una persona que comete este tipo de actos.
2. **Exclusión de la suspensión de la ejecución de la pena:** Actualmente, al estar la pena mínima por debajo de los 48 meses, es posible acceder a la suspensión de la ejecución de la pena conforme al artículo 63 del Código Penal (CP). Esto implica que el infractor no cumple prisión intramural ni domiciliaria, incluso en casos de violencia extrema. Con este cambio, se evitaría dicha suspensión en casos agravados, garantizando que las conductas más graves sean sancionadas de manera efectiva.

Un aspecto destacable de esta propuesta es su **enfoque gradual en relación con el avance de la protección de la vida de los animales**, ya que el aumento de la pena a 32 meses solo se aplicaría al delito de muerte del animal y no a las lesiones graves. Además, no se establece una sanción privativa de la libertad en todos los casos de muerte, sino únicamente en aquellos en los que la conducta esté acompañada de agravantes específicos. **De esta manera, se asegura que las sanciones más severas recaigan exclusivamente sobre los casos más graves, manteniendo un equilibrio entre la proporcionalidad y la eficacia de la norma.**

Así mismo, las penas que se proponen en el proyecto de ley permiten a su vez que la persona condenada pueda acceder a la prisión domiciliaria, hecho que contribuye a la resocialización del condenado, siendo este uno de los fines de la pena. En palabras de la Corte Constitucional "la pena privativa de la libertad, por regla general se cumple *intra muros* en centro de reclusión, sin embargo, la misma puede tener una pena alternativa de prisión domiciliaria, entendida por esta Corporación como un mecanismo eficaz para alcanzar los fines de resocialización de la pena".²⁵

Finalmente, se considera que esta propuesta se alinea con las orientaciones actuales establecidas por el Consejo Nacional de Política criminal, pues aunque incrementa la pena de prisión, también **actualiza y refuerza el procedimiento sancionatorio policivo en casos de maltrato animal leve y crea un curso pedagógico de protección animal**, al cual podrán asistir los sancionados por maltrato animal en los procesos policivos, **asegurando así que la pena de prisión se mantenga como un recurso de última ratio**, en cumplimiento del principio de necesidad del derecho penal, reservando la privación de libertad únicamente para las conductas más graves.

"Principio de necesidad de la intervención penal relacionado a su vez con el carácter subsidiario, fragmentario y de ultima ratio del derecho penal: para esta Corporación, el derecho penal se enmarca dentro del principio de mínima intervención, conforme al cual el ius puniendi debe operar solamente cuando las demás alternativas de control han fallado. No existe obligación para el Estado de sancionar penalmente todas las conductas reprochables."²⁶

IV. MARCO JURÍDICO.

1. Marco internacional

Declaración Universal de los Derechos de los Animales.

Este texto, aunque no es vinculante para el Estado, contiene importantes pronunciamientos sobre el respeto a la vida de los animales, la importancia de la

²⁵ Sentencia C-328 de 2016. MP GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
²⁶ Sentencia C- 248 de 2004 MP. Rodrigo Escobar Gil.

preservación de las especies, la prohibición del maltrato y la protección del medio ambiente natural como hábitat de diferentes especies. Esta declaración ha sido adoptada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y, posteriormente, por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

2. Marco constitucional

En el orden constitucional, los artículos 1 y 79 han sido fuente concreta para las altas cortes en el análisis de la existencia y relevancia del deber constitucional de protección animal. Así, tal como ha sido desagregado en la presente exposición de motivos, la Corte Constitucional ha partido de la existencia de una *Constitución Ecológica o verde* para sustentar la irradiación en todo el ordenamiento de los deberes de protección a la naturaleza y la limitación de la autonomía de la voluntad, en materia por ejemplo del ejercicio del derecho de propiedad, en relación con la función social y ecológica que tiene la misma, como argumentó en **Sentencia C-459 de 2011**.

En la **Sentencia T-095 de 2016** La Corte hace referencia a las tres dimensiones de la Constitución Política Ecológica, resaltando que el medio ambiente sano y el bienestar de los animales incorporan este concepto:

La Corte ha precisado que la Constitución ecológica tiene una triple dimensión, por un lado, el deber de protección al medio ambiente es un principio que irradia todo el orden jurídico, siendo obligación del Estado, proteger las riquezas naturales de la Nación. De otro lado, existe un derecho de todos los individuos a gozar de un medio ambiente sano, el cual es exigible por medio de diferentes acciones judiciales –civiles, penales, populares-. A su vez, existen un conjunto de obligaciones impuestas a autoridades y particulares para el resguardo del medio ambiente, derivadas de disposiciones de la constitución ecológica.

(...)

Del concepto de medio ambiente, del deber de protección de la diversidad de flora y fauna y su integridad, de la protección a los recursos y del valor de la dignidad humana como el fundamento de las relaciones entre los seres humanos y estos con la naturaleza y los seres sintientes; se puede extraer un deber constitucional de protección del bienestar animal que encuentra su fundamento igualmente del principio de la solidaridad.

Sentencia C-041 de 2017

Respecto de la titularidad de los derechos de los animales, la Corte manifestó:

"Aunque la Constitución no reconozca explícitamente a los animales como titulares de derechos, ello no debe entenderse como su negación, ni menos como una prohibición para su reconocimiento -innominados-. Su exigencia atiende a factores como la evolución de la humanidad y los cambios que presente una sociedad, lo cual puede llevar a la Corte a hacer visible lo que a primera vista no se avizora en la Constitución.

Siendo este Tribunal el intérprete autorizado de la Carta Política (art. 241), tiene una función encomiable de hacer cierta para la realidad del Derecho la inclusión de los animales como titulares de ciertos derechos, en la obtención de los fines esenciales y sociales del Estado constitucional (preámbulo, arts. 1o y 2o superiores). Un derecho jurídicamente establecido y definido tiene en cuenta el sistema de evidencias, representaciones colectivas y creencias de la comunidad, por lo que el criterio de la consagración expresa de un derecho resulta insuficiente para cuestionar la posición aquí adoptada. Más aún cuando se endilga un déficit de protección o circunstancias de indefensión."

3. Marco legal y reglamentario.

En la misma línea, deben tenerse presente la **Ley 84 de 1989** donde se contempla el mandato de protección pública y privada consistente en que los animales tienen en todo el territorio nacional especial protección contra el sufrimiento y el dolor, causados directa o indirectamente por el hombre.

Disposición modificada por la **Ley 1774 de 2016** en donde se consagra legislativamente la cualificación de los animales como seres sintientes distintos de las cosas, modificando en lo pertinente el Código Civil y además incluyendo un título especial en el Código Penal referente a los delitos contra la integridad física y emocional de los animales. Adicionalmente esta ley establece el principio de la solidaridad social en el que el Estado, la sociedad y sus miembros tienen la obligación de asistir y proteger a los animales con acciones diligentes ante situaciones que pongan en peligro su vida, su salud o su integridad física.

Así mismo, la **Ley 1638 de 2013** que en materia de proscripción de tratos innecesariamente crueles estableció la prohibición de uso de animales silvestres ya

sean nativos o exóticos de cualquier especie en espectáculos de circos fijos e itinerantes, sin importar su denominación, en todo el territorio nacional.

La **Ley 2047 de 2020** prohibió la experimentación, importación, fabricación y comercialización de productos cosméticos, sus ingredientes o combinaciones de ellos que sean objeto de pruebas con animales y se dictan otras disposiciones.

A nivel reglamentario cobra importancia el **Decreto 1500 de 2007** "Por el cual se establece el reglamento técnico a través del cual se crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cármicos Comestibles y Derivados Cármicos Destinados para el Consumo Humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en su producción primaria, beneficio, despaste, desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o exportación", donde consta la obligación de que los animales deben ser sacrificados por métodos no crueles, que garanticen que éstos queden sin sentido o conocimiento antes de ser sacrificados.

V. IMPACTO FISCAL

Frente al artículo 7º Análisis del impacto fiscal de las normas de la Ley 819 de 2003 *Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones*, la Honorable Corte Constitucional se pronunció sobre su interpretación de la siguiente manera en la Sentencia C-502 de 2007:

"36. Por todo lo anterior, la Corte considera que los primeros tres incisos del art. 7º de la Ley 819 de 2003 deben entenderse como parámetros de racionalidad de la actividad legislativa, y como una carga que le incumbe inicialmente al Ministerio de Hacienda, una vez que el Congreso ha valorado, con la información y las herramientas que tiene a su alcance, las incidencias fiscales de un determinado proyecto de ley. Esto significa que ellos constituyen instrumentos para mejorar la labor legislativa.

Es decir, el mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro de Hacienda.

Y en ese proceso de racionalidad legislativa la carga principal reposa en el Ministerio de Hacienda, que es el que cuenta con los datos, los equipos de funcionarios y la experticia en materia económica. Por lo tanto, en el caso de que los congresistas tramiten un proyecto incorporando estimativos erróneos sobre el impacto fiscal, sobre la manera de atender esos nuevos gastos o sobre la compatibilidad del proyecto con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, le corresponde al Ministro de Hacienda intervenir en el proceso legislativo para ilustrar al Congreso acerca de las consecuencias económicas del proyecto. Y el Congreso habrá de recibir y valorar el concepto emitido por el Ministerio. No obstante, la carga de demostrar y convencer a los congresistas acerca de la incompatibilidad de cierto proyecto con el Marco Fiscal de Mediano Plazo recae sobre el Ministro de Hacienda.

Por otra parte, es preciso reiterar que, si el Ministerio de Hacienda no participa en el curso del proyecto durante su formación en el Congreso de la República, mal puede ello significar que el proceso legislativo se encuentra viciado por no haber tenido en cuenta las condiciones establecidas en el art. 7° de la Ley 819 de 2003. Puesto que la carga principal en la presentación de las consecuencias fiscales de los proyectos reside en el Ministerio de Hacienda, la omisión del Ministerio en informar a los congresistas acerca de los problemas que presenta el proyecto no afecta la validez del proceso legislativo ni vicia la ley correspondiente."

VI. CONFLICTO DE INTERESES

De acuerdo con el artículo 291 de la Ley 5ª de 1992 -Reglamento Interno del Congreso, modificado por el artículo 3° de la Ley 2003 de 2019, establece que: "el autor del proyecto y el ponente presentarán en el cuerpo de la exposición de motivos un acápite que describa las circunstancias o eventos que podrían generar un conflicto de interés para la discusión y votación del proyecto, de acuerdo con el artículo 286. Estos serán criterios guías para que los otros congresistas tomen una decisión en torno a si se encuentran en una causal de impedimento, no obstante, otras causales que el Congresista pueda encontrar". De igual manera, el artículo 286 de la norma en comento, modificado por el artículo 1° de la Ley 2003 de 2019, define el conflicto de interés como la "situación donde la discusión o votación de un proyecto de ley o acto legislativo o artículo, pueda resultar en un beneficio particular, actual y directo a favor del congresista".

Por lo anterior, tenemos que en esta iniciativa legislativa no se evidencia que el ponente o los congresistas puedan incurrir en posibles conflictos de interés, toda

vez que tampoco puede predicarse un beneficio particular, actual y directo que les impida participar de la discusión y votación de este proyecto. Lo anterior, sin perjuicio del deber de los congresistas de examinar, en cada caso en concreto, la existencia de posibles hechos generadores de conflictos de interés, en cuyo evento deberán declararlos de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 286 ibidem: "Todos los congresistas deberán declarar los conflictos de intereses que pudieran surgir en ejercicio de sus funciones".

VII. PLIEGO DE MODIFICACIONES

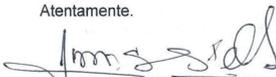
TEXTO APROBADO POR LA COMISIÓN PRIMERA DE CÁMARA	TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE EN PLENARIA DE CÁMARA	CONSIDERACIONES
<p>ARTÍCULO 5°. Modifíquese el artículo 339A de la Ley 599 de 2000, así:</p> <p>ARTÍCULO 339A. MUERTE AL ANIMAL. El que, por cualquier medio o procedimiento, maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado causándole la muerte, incurrirá en pena de prisión de veinticuatro (24) a cincuenta y seis (56) meses, inhabilidad especial de dos (2) a cinco (5) años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de treinta (30) a sesenta (60) salarios</p>	<p>ARTÍCULO 5°. Modifíquese el artículo 339A de la Ley 599 de 2000, así:</p> <p>ARTÍCULO 339A. MUERTE AL ANIMAL. El que, por cualquier medio o procedimiento, maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado causándole la muerte, incurrirá en pena de prisión de veinticuatro (24) treinta y dos (32) a cincuenta y seis (56) meses, inhabilidad especial de dos (2) a cinco (5) años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de treinta (30) a sesenta (60) salarios</p>	<p>El objetivo de esta modificación es incrementar, en un plazo de 8 meses, la pena mínima para el delito de muerte de un animal, en comparación con la versión actual aprobada en el tercer debate. Este ajuste normativo se fundamenta en mantener el delito como "excusable" en su forma básica, pero, al imputarse agravantes como la muerte del animal con sevicia, la pena mínima se elevaría a 48 meses. Con ello, se persiguen dos resultados principales:</p> <p>1.- Obtener una medida de aseguramiento: Al tratarse de un delito cometido con altos niveles de violencia (agravantes), se cumpliría con el requisito de los 48 meses de pena mínima establecido en el artículo 313 del Código</p>

mínimos mensuales legales vigentes.	mínimos mensuales legales vigentes.	<p>Procesal Penal (CPP), lo que permitiría a la Fiscalía solicitar la detención preventiva del imputado y así reducir los riesgos para la sociedad de tener en libertad una persona que comete este tipo de actos.</p> <p>2.- Exclusión de la suspensión de la ejecución de la pena: Actualmente, al estar la pena mínima por debajo de los 48 meses, es posible acceder a la suspensión de la ejecución de la pena conforme al artículo 63 del Código Penal (CP). Esto implica que el infractor no cumple prisión intramural ni domiciliaria, incluso en casos de violencia extrema. Con este cambio, se evitaría dicha suspensión en casos agravados, garantizando que las conductas más graves sean sancionadas de manera efectiva.</p> <p>Un aspecto destacable de esta propuesta es su enfoque gradual respecto del avance de la protección de la vida de los animales, ya que el aumento de la pena solo se aplicaría al delito de muerte del animal y no a las lesiones. Además, no se establece una sanción privativa de la libertad en todos los casos de muerte, sino únicamente en aquellos en los que la conducta esté acompañada de agravantes específicos. De esta manera,</p>
-------------------------------------	-------------------------------------	--

		se asegura que las sanciones más severas recaigan exclusivamente sobre los casos más graves, manteniendo un equilibrio entre la proporcionalidad y la eficacia de la norma.
<p>ARTÍCULO 11°. Sustitúyase el artículo 47 de la ley 84 de 1989 el cual quedará así:</p> <p>ARTÍCULO 47. TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL DE MALTRATO ANIMAL. Se tramitará mediante el Proceso Verbal de Maltrato Animal las conductas que pueden ser constitutivas como maltrato y actos de crueldad hacia los animales que se encuentran consagradas en la Ley 84 de 1989, la Ley 1774 de 2016 y las demás normas que las complementen o modifiquen, en las etapas siguientes:</p> <p>1. Iniciación de la Acción. El inicio del proceso se puede adelantar de oficio o a petición por parte de la ciudadanía. Cuando la autoridad conozca en flagrancia del comportamiento de maltrato animal, podrá iniciar de inmediato la audiencia pública.</p>	<p>ARTÍCULO 11°. Sustitúyase el artículo 47 de la ley 84 de 1989 el cual quedará así:</p> <p>ARTÍCULO 47. TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL DE MALTRATO ANIMAL. Se tramitará mediante el Proceso Verbal de Maltrato Animal las conductas que pueden ser constitutivas como maltrato y actos de crueldad hacia los animales que se encuentran consagradas en la Ley 84 de 1989, la Ley 1774 de 2016 y las demás normas que las complementen o modifiquen, en las etapas siguientes:</p> <p>1. Iniciación de la Acción. El inicio del proceso se puede adelantar de oficio o a petición por parte de la ciudadanía. Cuando la autoridad conozca en flagrancia del comportamiento de maltrato animal, podrá iniciar de inmediato la audiencia pública.</p>	

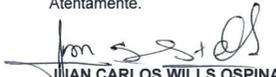
<p>2. Citación. El Inspector de Policía, dentro de los cinco (5) días siguientes que tenga conocimiento de hechos constitutivos de maltrato animal citará a audiencia pública al presunto infractor y peticionario, si no fuera de oficio, mediante comunicación escrita, correo certificado, medio electrónico, medio de comunicación del que disponga, o por el medio más expedito o idóneo, donde se señale la norma que lo regula y el acto de crueldad animal específico el cual se está investigando.</p> <p>3. Audiencia Pública. La audiencia pública se realizará en el lugar de los hechos o en el despacho del Inspector de Policía. Esta se surtirá mediante los siguientes pasos:</p> <p>a) Argumentos. En la audiencia la autoridad competente, otorgará tanto al presunto infractor como al peticionario un tiempo máximo de veinte (20) minutos para exponer sus argumentos, aportar y solicitar las pruebas que pretende hacer valer frente a los hechos generadores</p>	<p>2. Citación. El Inspector de Policía, dentro de los cinco (5) días siguientes que tenga conocimiento de hechos constitutivos de maltrato animal citará a audiencia pública al presunto infractor y peticionario, si no fuera de oficio, mediante comunicación escrita, correo certificado, medio electrónico, medio de comunicación del que disponga, o por el medio más expedito o idóneo, donde se señale la norma que lo regula y el acto de crueldad animal específico el cual se está investigando.</p> <p>3. Audiencia Pública. La audiencia pública se realizará en el lugar de los hechos o en el despacho del Inspector de Policía. Esta se surtirá mediante los siguientes pasos:</p> <p>a) Argumentos. En la audiencia la autoridad competente, otorgará tanto al presunto infractor como al peticionario un tiempo máximo de veinte (20) minutos para exponer sus argumentos, aportar y solicitar las pruebas que pretende hacer valer frente a los hechos generadores</p>	<p>del presunto maltrato animal,</p> <p>b) Pruebas. Si el presunto infractor o peticionario solicita la práctica de pruebas adicionales, pertinentes y conducentes, y si el Inspector de Policía las considera viables o las requiere, las decretará y se practicarán en un término máximo de diez (10) días prorrogables por diez (10) días más, cuando las condiciones del caso lo ameriten. Igualmente, la autoridad podrá decretar de oficio las pruebas que requiera y dispondrá que se practiquen dentro del mismo término. La audiencia se reanudará al día siguiente al vencimiento de la práctica de pruebas. Tratándose de hechos notorios o de negaciones indefinidas, se podrá prescindir de la práctica de pruebas y la autoridad de Policía decidirá de plano. Cuando se requieran conocimientos técnicos especializados, los servidores públicos del sector central y descentralizado del nivel territorial, darán informes</p>	<p>del presunto maltrato animal,</p> <p>b) Pruebas. Si el presunto infractor o peticionario solicita la práctica de pruebas adicionales, pertinentes y conducentes, y si el Inspector de Policía las considera viables o las requiere, las decretará y se practicarán en un término máximo de diez (10) días prorrogables por diez (10) días más, cuando las condiciones del caso lo ameriten. Igualmente, la autoridad podrá decretar de oficio las pruebas que requiera y dispondrá que se practiquen dentro del mismo término. La audiencia se reanudará al día siguiente al vencimiento de la práctica de pruebas. Tratándose de hechos notorios o de negaciones indefinidas, se podrá prescindir de la práctica de pruebas y la autoridad de Policía decidirá de plano. Cuando se requieran conocimientos técnicos especializados, los servidores públicos del sector central y descentralizado del nivel territorial, darán informes</p>		
<p>por solicitud del Inspector de Policía de Policía;</p> <p>c) Decisión. Agotada la etapa probatoria, el Inspector de Policía valorará las pruebas, impondrá las sanciones a que da lugar o se abstendrá de imponer la sanción, sustentando su decisión con los respectivos fundamentos normativos y hechos conducentes demostrados. La decisión quedará notificada en estrados.</p> <p>Dentro de la decisión el Inspector de Policía definirá la situación jurídica del o los animales que hayan sido aprehendidos preventivamente al inicio del proceso, decisión que puede ser la figura del decomiso del o los animales o la devolución del o los mismos con compromisos los cuales serán ordenados dentro de la decisión.</p>	<p>por solicitud del Inspector de Policía de Policía;</p> <p>c) Decisión. Agotada la etapa probatoria, el Inspector de Policía valorará las pruebas, impondrá las sanciones a que da lugar o se abstendrá de imponer la sanción, sustentando su decisión con los respectivos fundamentos normativos y hechos conducentes demostrados. La decisión quedará notificada en estrados.</p> <p>Dentro de la decisión el Inspector de Policía definirá la situación jurídica del o los animales que hayan sido aprehendidos preventivamente al inicio del proceso, decisión que puede ser la figura del decomiso del o los animales o la devolución del o los mismos con compromisos los cuales serán ordenados dentro de la decisión. Así mismo, cuando el infractor sea reincidente por actos que constituyan maltrato animal leve, podrá imponer la prohibición temporal de tenencia de animales por un tiempo de entre 1 a 3 años.</p>	<p>Dado que, en la práctica del derecho sancionatorio policivo por maltrato animal, es común que los inspectores impongan sanciones a reincidentes sin que exista un mecanismo que les impida adquirir nuevos animales, se evidencia un</p>	<p>4. Recursos. Contra la decisión proferida por el Inspector de Policía proceden los recursos de reposición y, en subsidio, el de apelación ante el superior jerárquico, los cuales se solicitarán, concederán y sustentarán dentro de la misma audiencia. El recurso de reposición se resolverá inmediatamente, y de ser procedente el recurso de apelación, se interpondrá y concederá en el efecto devolutivo dentro de la audiencia y se remitirá al superior jerárquico dentro de los dos (2) días siguientes, ante quien se sustentará dentro de los dos (2) días siguientes al recibo del recurso. El recurso de apelación se resolverá dentro de los ocho (8) días siguientes al recibo de la actuación.</p> <p>5. Cumplimiento o ejecución del fallo y de orden de Policía emitidas. Una vez ejecutoriada la decisión que contenga una orden de Policía o una sanción, esta se cumplirá en un término máximo de cinco (5) días.</p> <p>PARÁGRAFO 1°. Si el presunto infractor no se</p>	<p>4. Recursos. Contra la decisión proferida por el Inspector de Policía proceden los recursos de reposición y, en subsidio, el de apelación ante el superior jerárquico, los cuales se solicitarán, concederán y sustentarán dentro de la misma audiencia. El recurso de reposición se resolverá inmediatamente, y de ser procedente el recurso de apelación, se interpondrá y concederá en el efecto devolutivo dentro de la audiencia y se remitirá al superior jerárquico dentro de los dos (2) días siguientes, ante quien se sustentará dentro de los dos (2) días siguientes al recibo del recurso. El recurso de apelación se resolverá dentro de los ocho (8) días siguientes al recibo de la actuación.</p> <p>5. Cumplimiento o ejecución del fallo y de orden de Policía emitidas. Una vez ejecutoriada la decisión que contenga una orden de Policía o una sanción, esta se cumplirá en un término máximo de cinco (5) días.</p> <p>PARÁGRAFO 1°. Si el presunto infractor no se</p>	<p>vacío normativo. Por ello, se propone subsanar esta deficiencia incorporando, dentro del procedimiento policivo, la prohibición de tenencia de animales por un período determinado. Este plazo sería menor al establecido para los delitos contra los animales con el fin de cumplir con principios como la proporcionalidad y serviría como una medida preventiva efectiva para evitar la reincidencia.</p>

<p>presenta a la audiencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, la autoridad tendrá por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento de maltrato animal y entrará a resolver de fondo, con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades, salvo que la autoridad de Policía considere indispensable decretar la práctica de una prueba adicional. En caso de inasistencia a la audiencia, el procedimiento se suspenderá por un término máximo de tres (3) días, dentro de los cuales el presunto infractor deberá aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa de inasistencia, la cual, de resultar admisible por la autoridad competente, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en este artículo.</p> <p>PARÁGRAFO 2°. El funcionario competente que conozca del proceso verbal de maltrato animal podrá emitir órdenes de policía de conformidad con lo</p>	<p>presenta a la audiencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, la autoridad tendrá por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento de maltrato animal y entrará a resolver de fondo, con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades, salvo que la autoridad de Policía considere indispensable decretar la práctica de una prueba adicional. En caso de inasistencia a la audiencia, el procedimiento se suspenderá por un término máximo de tres (3) días, dentro de los cuales el presunto infractor deberá aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa de inasistencia, la cual, de resultar admisible por la autoridad competente, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en este artículo.</p> <p>PARÁGRAFO 2°. El funcionario competente que conozca del proceso verbal de maltrato animal podrá emitir órdenes de policía de conformidad con</p>	<p>señalado en el artículo 150 de la Ley 1801 de 2016.</p> <p>lo señalado en el artículo 150 de la Ley 1801 de 2016.</p> <p><u>PARÁGRAFO 3°. Cuando las autoridades de Policía impongan sanciones por maltrato animal o la prohibición temporal de tenencia de animales, deberán informar a la Policía Nacional para que proceda a su registro en el Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC o la base de datos de la que habla el parágrafo 2 del artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.</u></p> <p>Actualmente, existe una plataforma llamada Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), administrada por la Policía Nacional, que permite consultar si una persona tiene contravenciones activas relacionadas con el Código Nacional de Policía. Este cambio incluye dentro de esta base de datos, las sanciones policivas derivadas por maltrato animal, con el fin de centralizar y facilitar el acceso a esta información.</p> <p>ARTÍCULO 24° RUTA DE ATENCIÓN AL MALTRATO ANIMAL. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, las entidades que conforman el Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal -SINAPYBA, con participación de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, y demás entidades con competencia sobre asuntos de protección y bienestar animal, expedirán la Ruta de Atención al Maltrato Animal como un instrumento para formalizar la actuación institucional coordinada en los niveles</p> <p>ARTÍCULO 24° RUTA DE ATENCIÓN AL MALTRATO ANIMAL. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, las entidades que conforman el Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal -SINAPYBA, con participación de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, y demás entidades con competencia sobre asuntos de protección y bienestar animal, expedirán la Ruta de Atención al Maltrato Animal como un instrumento para formalizar la actuación institucional coordinada en los niveles</p>
<p>nacional, departamental y municipal o distrital para la atención de casos de maltrato animal, de acuerdo a las competencias de cada entidad.</p> <p>La Ruta de Atención al Maltrato Animal deberá incluir, como mínimo, la adopción de un canal específico para la recepción de quejas o denuncias por maltrato animal, las medidas necesarias para atender los casos reportados, y los protocolos de actuación urgente que correspondan a cada actor institucional, con el fin de salvaguardar la integridad física y emocional de los animales presuntamente maltratados.</p> <p>PARÁGRAFO 1°. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de los lineamientos mencionados en el presente artículo, los entes territoriales adoptarán, mediante acto administrativo, la Ruta de Atención al Maltrato Animal de acuerdo a las características específicas de cada territorio. Estos protocolos deberán ser actualizados cada dos (2) años.</p> <p>PARÁGRAFO 2°. Las Administraciones municipales y distritales, las Inspecciones</p>	<p>nacional, departamental y municipal o distrital para la atención de casos de maltrato animal, de acuerdo a las competencias de cada entidad.</p> <p>La Ruta de Atención al Maltrato Animal deberá incluir, como mínimo, la adopción de un canal específico para la recepción de quejas o denuncias por maltrato animal, las medidas necesarias para atender los casos reportados, y los protocolos de actuación urgente que correspondan a cada actor institucional, con el fin de salvaguardar la integridad física y emocional de los animales presuntamente maltratados.</p> <p>PARÁGRAFO 1°. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de los lineamientos mencionados en el presente artículo, los entes territoriales adoptarán, mediante acto administrativo, la Ruta de Atención al Maltrato Animal de acuerdo a las características específicas de cada territorio. Estos protocolos deberán ser actualizados cada dos (2) años.</p> <p>PARÁGRAFO 2°. Las Administraciones municipales y distritales, las Inspecciones</p>	<p>de Policía, los Corregidores, la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), deberán reportar anualmente a la entidad encargada de coordinar el SINAPYBA los indicadores de su gestión frente a los asuntos de maltrato animal, según su competencia. El SINAPYBA consolidará la información y evaluará la eficacia de la Ruta de Atención al Maltrato Animal, para hacer los ajustes que correspondan.</p> <p>de Policía, los Corregidores, la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), deberán reportar anualmente a la entidad encargada de coordinar el SINAPYBA los indicadores de su gestión frente a los asuntos de maltrato animal, según su competencia. El SINAPYBA consolidará la información y evaluará la eficacia de la Ruta de Atención al Maltrato Animal, para hacer los ajustes que correspondan.</p> <p><u>PARÁGRAFO 3°. Dentro de la Ruta de Atención al Maltrato Animal, deberá establecerse un protocolo para la caracterización y atención oportuna de los animales cuyas vidas o integridad física se vean afectadas por causas atribuibles al conflicto armado. Las Fuerzas Militares y Policía Nacional, colaborarán de manera armónica con las entidades de orden nacional y territorial para la atención de los animales identificados en virtud de este protocolo.</u></p> <p>La violencia en el Catatumbo no sólo ha impactado a las personas, sino también a miles de animales que, en medio del conflicto armado, son abandonados forzosamente cuando sus dueños huyen hacia zonas seguras. Este abandono los deja en grave riesgo, expuestos al hambre, la desnutrición y la muerte, sin que exista un mecanismo claro para proteger su vida e integridad. Por ello, es urgente implementar una norma que incluya un protocolo específico para atender a estos animales, garantizando su protección y bienestar en el marco del conflicto.</p> <p>NO TIENE EQUIVALENCIA</p> <p><u>ARTÍCULO NUEVO. Registro para la inhabilidad de</u></p> <p>Dentro de las penas del delito de maltrato animal consagrado</p>

<p><u>personas condenadas por delitos contra los animales: Corresponde al Ministerio de Defensa-Policía Nacional administrar la base de datos personales de quienes hayan sido judicialmente inhabilitados para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con animales o a quienes haya sido prohibida su tenencia por el cometimiento de los delitos descritos en los artículos 339A y 339C de la Ley 599 de 2000.</u></p> <p><u>El certificado de antecedentes judiciales tendrá una sección especial de carácter reservado denominada Inhabilidades impuestas por delitos contra los animales. El Ministerio de Defensa-Policía Nacional expedirá el certificado de inhabilitación por delitos contra los animales a solicitud de las entidades públicas o privadas que dentro de su objeto desarrollen actividades relacionadas con animales y que pretendan consultar los antecedentes de un aspirante a un cargo o empleado activo con el fin de constatar que dicha persona no tenga activa</u></p> <p>en el artículo 339A se crea la inhabilitación de ejercer profesión, oficio o comercio con animales. Sin embargo, en la actualidad no existe un registro que permita a personas jurídicas o privadas verificar si un aspirante a un cargo tiene alguna inhabilitación para trabajar con animales. Por ejemplo, un veterinario condenado por maltrato animal y, por tanto, inhabilitado para ejercer su profesión, o una persona dedicada a la peluquería o cuidado de animales, podrían ser contratados sin que el empleador tenga conocimiento de su situación legal.</p> <p>Con este artículo, se busca implementar un mecanismo que permita a los empleadores consultar si un candidato está inhabilitado por sentencia judicial para ejercer profesiones u oficios relacionados con animales, garantizando así el cumplimiento de las sanciones impuestas y protegiendo</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td><u>alguna inhabilitación o prohibición de tenencia.</u></td> <td></td> </tr> </table>		<u>alguna inhabilitación o prohibición de tenencia.</u>	
	<u>alguna inhabilitación o prohibición de tenencia.</u>			
<p>IX. TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE EN LA PLENARIA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES.</p> <p>PROYECTO DE LEY NO. 407 DE 2024 CÁMARA – 008 DE 2024 SENADO</p> <p><i>“Por la cual se fortalece la lucha contra el maltrato animal y se actualiza el Estatuto Nacional de Protección de los Animales Ley 84 de 1989 - Ley Ángel”</i></p> <p>EL CONGRESO DE COLOMBIA</p> <p>DECRETA:</p> <p>ARTÍCULO 1°. OBJETO. El objeto de la presente ley es fortalecer la lucha contra el maltrato animal, mediante acciones que garanticen la prevención, investigación y sanción de la violencia contra los animales en los procesos penales y policivos. Así mismo, se actualiza el Estatuto Nacional de Protección de los Animales, Ley 84 de 1989 con el fin de incluir nuevas formas de protección y garantizar la ejecución de acciones integrales de sensibilización ciudadana, prevención y atención efectiva del maltrato animal.</p> <p>ARTÍCULO 2°. Adiciónese un numeral al artículo 43° de la Ley 599 de 2000, así:</p> <p>12. La prohibición de adquisición, tenencia, cuidado o albergue de animales a cualquier título</p> <p>ARTÍCULO 3°. Adiciónese un artículo a la Ley 599 de 2000, así:</p> <p>ARTÍCULO 50A. LA PROHIBICIÓN DE ADQUISICIÓN Y TENENCIA DE ANIMALES. La prohibición al penado de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales de cualquier especie, se aplicará a través de cualquier medio como compra, donación, permuta, adopción, sentencia judicial, u otro. Además, incluye la prohibición de recibir animales por prescripción, sucesión testamentaria u otros cambios de estado legal.</p> <p>ARTÍCULO 4°. Adiciónese un inciso al artículo 51° de la Ley 599 de 2000, así:</p> <p>La prohibición de adquisición, tenencia, cuidado o albergue de animales aplicará por el doble del tiempo de la pena impuesta.</p>	<p>VIII. PROPOSICIÓN.</p> <p>Con fundamento en las anteriores consideraciones, presento PONENCIA POSITIVA, y de manera respetuosa solicito a la Plenaria de la Cámara de Representantes, dar segundo debate al Proyecto de Ley No. 407 de 2024 Cámara –008 de 2024 Senado, “Por la cual se fortalece la lucha contra el maltrato animal y se actualiza el Estatuto Nacional de Protección de los Animales Ley 84 de 1989 - Ley Ángel”, conforme al texto propuesto.</p> <p>Atentamente.</p>  <p>JUAN CARLOS WILLS OSPINA Representante a la Cámara</p> <p>ARTÍCULO 5°. Modifíquese el artículo 339A de la Ley 599 de 2000, así:</p> <p>ARTÍCULO 339A. MUERTE AL ANIMAL. El que, por cualquier medio o procedimiento, maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado causándole la muerte, incurrirá en pena de prisión de treinta y dos (32) a cincuenta y seis (56) meses, inhabilitación especial de dos (2) a cinco (5) años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de treinta (30) a sesenta (60) salarios mínimos mensuales legales vigentes.</p> <p>ARTÍCULO 6°. Modifíquese el artículo 339B en la Ley 599 de 2000, así:</p> <p>ARTÍCULO 339B. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN PUNITIVA. Las penas contempladas en los artículos 339A y 339C se aumentarán de la mitad a tres cuartas partes, si la conducta se cometiere:</p> <ol style="list-style-type: none"> Con sevicia; Cuando una o varias de las conductas mencionadas se perpetren en vía o sitio público; Valiéndose de inimputables o de menores de edad o en presencia de aquellos; Cuando se cometan actos sexuales con los animales; Cuando alguno de los delitos previstos en los artículos anteriores se cometiere por servidor público o quien ejerza funciones públicas. Cuando la conducta sea registrada, difundida o promovida a través de cualquier medio de comunicación masivo, plataforma digital, red social o medio de naturaleza análoga, fomentando su comisión o generando apología del maltrato animal. Cuando la conducta punible se realice con fines de explotación económica. <p>PARÁGRAFO 1. Quedan exceptuadas de las penas previstas en esta ley, las prácticas, en el marco de las normas vigentes, de buen manejo de los animales que tengan como objetivo el cuidado, reproducción, cría, adiestramiento, mantenimiento; las de beneficio y procesamiento relacionadas con la producción de alimentos; y las actividades de entrenamiento para competencias legalmente aceptadas.</p>			

<p>PARÁGRAFO 2. Quienes adelanten acciones de salubridad pública tendientes a controlar brotes epidémicos, o transmisión de enfermedades zoonóticas, no serán objeto de las penas previstas en la presente ley.</p> <p>PARÁGRAFO 3. Quienes adelanten las conductas descritas en el artículo 7° de la Ley 84 de 1989 no serán objeto de las penas previstas en la presente ley.</p> <p>ARTÍCULO 7°. Inclúyase el artículo 339C en la Ley 599 de 2000, así:</p> <p>ARTÍCULO 339C. LESIONES QUE MENOSCABEN GRAVEMENTE LA SALUD O LA INTEGRIDAD FÍSICA DEL ANIMAL. El que, por cualquier medio o procedimiento, con el ánimo de maltratar, cause lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física de un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado, incurrirá en pena de prisión de veinte (20) a cuarenta y dos (42) meses, inhabilidad especial de uno (1) a tres (3) años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de quince (15) a treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes.</p> <p>ARTÍCULO 8°. Sustitúyase el artículo 14 de la Ley 84 de 1989, por el siguiente:</p> <p>ARTÍCULO 14. REDUCCIÓN DE LA MULTA. Si la persona sancionada acepta la conducta de maltrato animal, una vez impuesta la multa en el fallo de primera instancia y sin necesidad de otra actuación administrativa, podrá cancelar el cincuenta por ciento (50%) del valor de la multa dentro de los cinco (5) días siguientes al fallo de primera instancia, siempre y cuando asista obligatoriamente, dentro de este término, al Curso de Sensibilización Contra el Maltrato Animal que impartirá la alcaldía municipal o distrital y que tendrá como fin fomentar conductas de respeto y protección hacia los animales e informar de las consecuencias penales y sancionatorias por realizar actos de maltrato animal.</p> <p>PARÁGRAFO 1°: Las administraciones municipales y distritales adoptarán las medidas necesarias para impartir el curso de sensibilización al que hace referencia la presente ley, el cual deberá cumplir con los lineamientos que para tal fin expidan las entidades que conforman el Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal - SINAPYBA, dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.</p> <p>PARÁGRAFO 2°: No habrá reducción de la multa si la persona es reincidente en la conducta de maltrato animal.</p>	<p>ARTÍCULO 9°. Modifíquese el artículo 46 de la Ley 84 de 1989 el cual quedará así:</p> <p>ARTÍCULO 46. COMPETENCIA. Corresponde en primera instancia a los inspectores de policía, o a quien haga sus veces, y en segunda a los alcaldes municipales o distritales, su delegado o la autoridad definida en el marco de la autonomía territorial, conocer y adelantar el proceso sancionatorio por hechos constitutivos de maltrato leve, que no causen la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física de conformidad con lo establecido en el título XI-A del Código Penal.</p> <p>Para el cumplimiento de los fines del Estado y del objeto de la presente ley, las alcaldías e inspecciones contarán con la colaboración armónica de las siguientes entidades, quienes además pondrán a disposición los medios y/o recursos que sean necesarios en los términos previstos en la Constitución Política, la Ley 99 de 1993 y en la Ley 1333 del 2009: el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como las demás entidades que conforman el Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal (SINAPYBA), los Departamentos, las Corporaciones Autónomas Regionales, las Corporaciones de Desarrollo Sostenible, las entidades territoriales con competencias en protección y bienestar animal, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66° de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos de los que trata el artículo 13° de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales.</p> <p>PARÁGRAFO. Los dineros recaudados por conceptos de multas por la respectiva entidad territorial se destinarán de manera exclusiva a la formulación, divulgación, ejecución y seguimiento de políticas de protección a los animales, campañas de sensibilización y educación ciudadana y constitución de fondos de protección animal, vinculando de manera activa a las organizaciones animalistas y juntas defensoras de animales o quien haga sus veces para el cumplimiento de este objetivo.</p> <p>ARTÍCULO 10°. Modifíquese el artículo 46A de la ley 84 de 1989 el cual quedará así:</p> <p>ARTÍCULO 46A. APREHENSIÓN MATERIAL PREVENTIVA. Es el procedimiento policivo mediante el cual un animal es retirado de manera transitoria de la tenencia del presunto maltratador porque se tiene conocimiento o indicio de la realización de conductas que constituyen maltrato o que vulneran su integridad física o emocional. Este procedimiento puede ser adelantado por la</p>
<p>Policía Nacional, los inspectores de policía, los alcaldes municipales o distritales o sus delegados. Para este procedimiento no es necesario que medie orden judicial o administrativa previa. Toda queja deberá ser atendida como máximo en las siguientes veinticuatro (24) horas.</p> <p>PARÁGRAFO 1°. Cuando se entregue en custodia el animal doméstico a las entidades de protección animal, el responsable, cuidador o tenedor estará en la obligación de garantizar los gastos de manutención y alimentación del animal sin perjuicio de las obligaciones legales que le corresponden a los entes territoriales.</p> <p>En caso de que el propietario, cuidador o tenedor del animal no cancele las expensas respectivas dentro de un plazo de quince (15) días calendario, la entidad de protección podrá disponer definitivamente para entregar en adopción el animal.</p> <p>PARÁGRAFO 2°. Como medida para evitar la revictimización de los animales aprehendidos y proteger sus derechos, el inspector de policía podrá abstenerse legítimamente de entregarlos a sus propietarios, tenedores o cuidadores, o a quienes sean los presuntos responsables de la comisión de las conductas de maltrato, hasta tanto no haya decisión en firme en el proceso verbal de maltrato animal y sin perjuicio de las sanciones de tipo penal que procedan por la comisión de aquellas.</p> <p>ARTÍCULO 11°. Sustitúyase el artículo 47 de la ley 84 de 1989 el cual quedará así:</p> <p>ARTÍCULO 47. TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL DE MALTRATO ANIMAL. Se tramitará mediante el Proceso Verbal de Maltrato Animal las conductas que pueden ser constitutivas como maltrato y actos de crueldad hacia los animales que se encuentran consagradas en la Ley 84 de 1989, la Ley 1774 de 2016 y las demás normas que las complementen o modifiquen, en las etapas siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Iniciación de la Acción. El inicio del proceso se puede adelantar de oficio o a petición por parte de la ciudadanía. Cuando la autoridad conozca en flagrancia del comportamiento de maltrato animal, podrá iniciar de inmediato la audiencia pública. 2. Citación. El Inspector de Policía, dentro de los cinco (5) días siguientes que tenga conocimiento de hechos constitutivos de maltrato animal citará a audiencia pública al presunto infractor y peticionario, si no fuera de oficio, mediante comunicación escrita, correo certificado, medio electrónico, medio de comunicación del que disponga, o por el medio más expedito o idóneo, donde se 	<p>señale la norma que lo regula y el acto de crueldad animal específico el cual se está investigando.</p> <p>3. Audiencia Pública. La audiencia pública se realizará en el lugar de los hechos o en el despacho del Inspector de Policía. Esta se surtirá mediante los siguientes pasos:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Argumentos. En la audiencia la autoridad competente, otorgará tanto al presunto infractor como al peticionario un tiempo máximo de veinte (20) minutos para exponer sus argumentos, aportar y solicitar las pruebas que pretende hacer valer frente a los hechos generadores del presunto maltrato animal. b) Pruebas. Si el presunto infractor o peticionario solicita la práctica de pruebas adicionales, pertinentes y conducentes, y si el Inspector de Policía las considera viables o las requiere, las decretará y se practicarán en un término máximo de diez (10) días prorrogables por diez (10) días más, cuando las condiciones del caso lo ameriten. Igualmente, la autoridad podrá decretar de oficio las pruebas que requiera y dispondrá que se practiquen dentro del mismo término. La audiencia se reanudará al día siguiente al vencimiento de la práctica de pruebas. Tratándose de hechos notorios o de negaciones indefinidas, se podrá prescindir de la práctica de pruebas y la autoridad de Policía decidirá de plano. Cuando se requieran conocimientos técnicos especializados, los servidores públicos del sector central y descentralizado del nivel territorial, darán informes por solicitud del Inspector de Policía de Policía; c) Decisión. Agotada la etapa probatoria, el Inspector de Policía valorará las pruebas, impondrá las sanciones a que da lugar o se abstendrá de imponer la sanción, sustentando su decisión con los respectivos fundamentos normativos y hechos conducentes demostrados. La decisión quedará notificada en estrados. <p>Dentro de la decisión el Inspector de Policía definirá la situación jurídica del o los animales que hayan sido aprehendidos preventivamente al inicio del proceso, decisión que puede ser la figura del decomiso del o los animales o la devolución del o los mismos con compromisos los cuales serán ordenados dentro de la decisión. Así mismo, cuando el infractor sea reincidente por actos que constituyan maltrato animal leve, podrá imponer la prohibición temporal de tenencia de animales por un tiempo de entre 1 a 3 años.</p> <p>4. Recursos. Contra la decisión proferida por el Inspector de Policía proceden los recursos de reposición y, en subsidio, el de apelación ante el superior</p>

<p>jerárquico, los cuales se solicitarán, concederán y sustentarán dentro de la misma audiencia. El recurso de reposición se resolverá inmediatamente, y de ser procedente el recurso de apelación, se interpondrá y concederá en el efecto devolutivo dentro de la audiencia y se remitirá al superior jerárquico dentro de los dos (2) días siguientes, ante quien se sustentará dentro de los dos (2) días siguientes al recibo del recurso. El recurso de apelación se resolverá dentro de los ocho (8) días siguientes al recibo de la actuación.</p> <p>5. Cumplimiento o ejecución del fallo y de orden de Policía emitidas. Una vez ejecutoriada la decisión que contenga una orden de Policía o una sanción, esta se cumplirá en un término máximo de cinco (5) días.</p> <p>PARÁGRAFO 1°. Si el presunto infractor no se presenta a la audiencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, la autoridad tendrá por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento de maltrato animal y entrará a resolver de fondo, con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades, salvo que la autoridad de Policía considere indispensable decretar la práctica de una prueba adicional. En caso de inasistencia a la audiencia, el procedimiento se suspenderá por un término máximo de tres (3) días, dentro de los cuales el presunto infractor deberá aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa de inasistencia, la cual, de resultar admisible por la autoridad competente, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en este artículo.</p> <p>PARÁGRAFO 2°. El funcionario competente que conozca del proceso verbal de maltrato animal podrá emitir órdenes de policía de conformidad con lo señalado en el artículo 150 de la Ley 1801 de 2016.</p> <p>PARÁGRAFO 3°. Cuando las autoridades de Policía impongan sanciones por maltrato animal o la prohibición temporal de tenencia de animales, deberán informar a la Policía Nacional para que proceda a su registro en el Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC o la base de datos de la que habla el parágrafo 2 del artículo 172 de la Ley 1801 de 2016.</p> <p>ARTÍCULO 12°. Sustitúyase el artículo 48 de la ley 84 de 1989 el cual quedará así:</p> <p>ARTÍCULO 48. PRINCIPIOS DEL PROCESO VERBAL DE MALTRATO ANIMAL. Son principios del procedimiento: la oralidad, la gratuidad, la</p>	<p>inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe.</p> <p>ARTÍCULO 13°. Sustitúyase el artículo 49 de la ley 84 de 1989 el cual quedará así:</p> <p>Artículo 49. MEDIOS DE PRUEBA. Son medios de prueba del proceso único de Policía los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Los documentos. 2. El testimonio. 3. La entrevista. 4. La inspección. 5. El peritaje. <p>Los demás medios consagrados en la Ley 1564 de 2012.</p> <p>ARTÍCULO 14°. Sustitúyase el artículo 50 de la ley 84 de 1989 el cual quedará así:</p> <p>ARTÍCULO 50. FACTOR DE COMPETENCIA. La competencia del Inspector de Policía para conocer sobre los comportamientos que estén relacionados con el maltrato animal, se determina por el lugar donde suceden los hechos.</p> <p>ARTÍCULO 15°. Sustitúyase el artículo 51 de la ley 84 de 1989 el cual quedará así:</p> <p>ARTÍCULO 51. DEL DECOMISO. Es la privación definitiva de la tenencia o propiedad de un animal que haya sido víctima de maltrato y que la autoridad competente considera no viable su devolución.</p> <p>PARÁGRAFO. El Inspector de Policía dejará a disposición del Centro de Bienestar del Municipio el animal o animales que haya decomisado por hechos constitutivos de maltrato animal.</p> <p>ARTÍCULO 16°. Sustitúyase el artículo 52 de la ley 84 de 1989 el cual quedará así:</p> <p>ARTÍCULO 52. TERCERO INTERVINIENTE. Dentro del Proceso Verbal de Maltrato Animal, la sociedad civil que sea reconocida como activista de protección a hacia los animales, las Juntas Defensoras de Animales o las entidades sin ánimo de lucro que demuestren la defensa de hacia los animales, podrán solicitar ante el Inspector de Policía hacer parte dentro del proceso con el fin de coadyuvar en dicho proceso y podrán ejercer todas las actuaciones procesales que tengan como fin de salvaguardar la vida e integridad del animal.</p>
<p>PARÁGRAFO. El Inspector de Policía deberá realizar un análisis de la solicitud con el fin de verificar la pertinencia de la participación del tercero interviniente dentro del Proceso Verbal de Maltrato Animal.</p> <p>ARTÍCULO 17°. Sustitúyase el artículo 53 de la ley 84 de 1989 el cual quedará así:</p> <p>ARTÍCULO 53. GASTOS Y EXPENSAS. En casos donde los animales aprehendidos preventivamente o sujetos a decomiso, generen gastos como alimentación, servicios veterinarios y otros, el declarado responsable del maltrato estará obligado a reembolsar dichos costos a la administración municipal. Esta obligación será formalizada en la decisión final dictada por autoridad competente.</p> <p>ARTÍCULO 18°. Sustitúyase el artículo 54 de la ley 84 de 1989 el cual quedará así:</p> <p>ARTÍCULO 54. PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD. La acción de policía en el proceso verbal de maltrato animal caduca en un año contado a partir de la ocurrencia del hecho que tipifique un comportamiento de maltrato y actos de crueldad para con los animales o del momento en que el afectado tuvo conocimiento de él. Las sanciones impuestas prescribirán en cinco (5) años, a partir de la fecha en que quede en firme la decisión de las autoridades de policía en el proceso verbal de maltrato animal.</p> <p>ARTÍCULO 19°. Sustitúyase el artículo 55 de la ley 84 de 1989 el cual quedará así:</p> <p>ARTÍCULO 55. FALTA DISCIPLINARIA DE LA AUTORIDAD DE POLICÍA. La autoridad de Policía que conozca y adelante el proceso verbal de maltrato animal en primera o segunda instancia e incumpla los términos señalados por este capítulo o que incurra en omisión y permita la caducidad de la acción o de las sanciones, incurrirá en falta disciplinaria grave, de conformidad con el régimen disciplinario aplicable.</p> <p>ARTÍCULO 20°. Sustitúyase el artículo 56 de la ley 84 de 1989 el cual quedará así</p> <p>ARTÍCULO 56. Las sanciones impuestas no eximen de la responsabilidad policiva señaladas en el título XIII de la ley 1801 de 2016, civil, fiscal, penal o disciplinaria a que haya lugar.</p> <p>ARTÍCULO 21°. Sustitúyase el artículo 57 de la ley 84 de 1989 el cual quedará así</p>	<p>ARTÍCULO 57. En los asuntos procedimentales no previstos en este capítulo, se aplicarán las disposiciones de la Ley 1801 de 2016, La Ley 1437 de 2011 y el Código General del Proceso.</p> <p>ARTÍCULO 22°. Adiciónese un numeral al artículo 163° de la Ley 1801 de 2016, así:</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Para socorrer a un animal cuando se tenga certeza de la realización de conductas constitutivas de maltrato, que pongan en riesgo inminente la vida o integridad del animal. <p>ARTÍCULO 23° ANIMALES SILVESTRES. La imposición de las medidas correctivas contenidas en el artículo 101° de la Ley 1801 de 2016 por comportamientos que afecten a animales de especies silvestres no excluye la imposición de otras sanciones, medidas preventivas o medidas correctivas por maltrato animal como las contenidas en la presente ley, en la Ley 1774 de 2016, en la Ley 2387 de 2024 y en las demás normas que la modifiquen o sustituyan.</p> <p>ARTÍCULO 24° RUTA DE ATENCIÓN AL MALTRATO ANIMAL. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, las entidades que conforman el Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal -SINAPYBA, con participación de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, y demás entidades con competencia sobre asuntos de protección y bienestar animal, expedirán la Ruta de Atención al Maltrato Animal como un instrumento para formalizar la actuación institucional coordinada en los niveles nacional, departamental y municipal o distrital para la atención de casos de maltrato animal, de acuerdo a las competencias de cada entidad.</p> <p>La Ruta de Atención al Maltrato Animal deberá incluir, como mínimo, la adopción de un canal específico para la recepción de quejas o denuncias por maltrato animal, las medidas necesarias para atender los casos reportados, y los protocolos de actuación urgente que correspondan a cada actor institucional, con el fin de salvaguardar la integridad física y emocional de los animales presuntamente maltratados.</p> <p>PARÁGRAFO 1°. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de los lineamientos mencionados en el presente artículo, los entes territoriales adoptarán, mediante acto administrativo, la Ruta de Atención al Maltrato Animal de acuerdo a</p>

<p>las características específicas de cada territorio. Estos protocolos deberán ser actualizados cada dos (2) años.</p> <p>PARÁGRAFO 2°. Las Administraciones municipales y distritales, las Inspecciones de Policía, los Corregidores, la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), deberán reportar anualmente a la entidad encargada de coordinar el SINAPYBA los indicadores de su gestión frente a los asuntos de maltrato animal, según su competencia. El SINAPYBA consolidará la información y evaluará la eficacia de la Ruta de Atención al Maltrato Animal, para hacer los ajustes que correspondan.</p> <p>PARÁGRAFO 3°. Dentro de la Ruta de Atención al Maltrato Animal, deberá establecerse un protocolo para la caracterización y atención oportuna de los animales cuyas vidas o integridad física se vean afectadas por causas atribuibles al conflicto armado. Las Fuerzas Militares y Policía Nacional, colaborarán de manera armónica con las entidades de orden nacional y territorial para la atención de los animales identificados en virtud de este protocolo.</p> <p>ARTÍCULO 25°. CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN. El Ministerio del Interior, con apoyo de las gobernaciones departamentales y las alcaldías municipales o distritales, realizará anualmente programas de capacitación y sensibilización dirigidos a los inspectores de policía en todo el territorio nacional, para instruirlos sobre las disposiciones de la presente ley y resaltar la importancia de atender de manera diligente y compasiva los casos de maltrato animal.</p> <p>Asimismo, tanto la Rama Judicial como la Fiscalía General de la Nación deberán capacitar y sensibilizar a sus funcionarios, según sus respectivas competencias, para asegurar una atención oportuna y con un enfoque integral y de cuidado frente a los delitos que atenten contra la vida y bienestar animal.</p> <p>ARTÍCULO 26° ESTUDIOS FORENSES. Dentro de los doce (12) meses siguientes a la expedición de la presente ley, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, y en coordinación con el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia de Colombia, deberá expedir protocolos o guías técnicas para la realización de los estudios forenses que sean necesarios en la investigación de delitos relacionados con maltrato animal.</p> <p>Estos protocolos o guías técnicas serán de obligatorio cumplimiento por parte de los profesionales en Medicina Veterinaria o Medicina Veterinaria y Zootecnia que</p>	<p>actúen como peritos en los procesos judiciales correspondientes, garantizando así la uniformidad y la rigurosidad científica en la recolección y el análisis de pruebas.</p> <p>PARÁGRAFO 1: La elaboración y expedición de dichos protocolos deberá contar con la participación activa y voluntaria de las Asociaciones y Sociedades Gremiales, Científicas y Profesionales de Medicina Veterinaria, Medicina Veterinaria y Zootecnia, y Zootecnia.</p> <p>PARÁGRAFO 2: Con el propósito de fortalecer la investigación forense en casos de maltrato animal, los municipios, distritos o gobernaciones, así como la Fiscalía General de la Nación, estarán facultados para suscribir contratos o convenios con instituciones de educación superior de naturaleza pública o privada, clínicas veterinarias legalmente constituidas u otros entes territoriales que dispongan del personal médico veterinario experto en medicina forense o áreas afines.</p> <p>ARTÍCULO 27°. Adiciónese el siguiente literal al artículo 6 de la Ley 84 de 1989, así:</p> <p>Z.1. Abandonar a un animal doméstico o domesticado.</p> <p>ARTÍCULO 28°. REGISTRO PARA LA INHABILIDAD DE PERSONAS CONDENADAS POR DELITOS CONTRA LOS ANIMALES. Corresponde al Ministerio de Defensa-Policía Nacional administrar la base de datos personales de quienes hayan sido judicialmente inhabilitados para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con animales o a quienes haya sido prohibida su tenencia por el cometimiento de los delitos descritos en los artículos 339A y 339C de la Ley 599 de 2000.</p> <p>El certificado de antecedentes judiciales tendrá una sección especial de carácter reservado denominada Inhabilidades impuestas por delitos contra los animales. El Ministerio de Defensa-Policía Nacional expedirá el certificado de inhabilidad por delitos contra los animales a solicitud de las entidades públicas o privadas que dentro de su objeto desarrollen actividades relacionadas con animales y que pretendan consultar los antecedentes de un aspirante a un cargo o empleado activo con el fin de constatar que dicha persona no tenga activa alguna inhabilidad o prohibición de tenencia.</p>
<p>ARTÍCULO 29° VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente rige a partir de su promulgación y publicación en el Diario Oficial y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el título IX "Disposiciones generales" y el artículo 58 de la Ley 84 de 1989.</p> <p>Atentamente,</p>  <p>JUAN CARLOS WILLS OSPINA Representante a la Cámara</p>	<p>TEXTO APROBADO EN LA COMISIÓN PRIMERA DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES EN PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY No. 407 DE 2024 CÁMARA – 008 DE 2024 SENADO "POR LA CUAL SE FORTALECE LA LUCHA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL Y SE ACTUALIZA EL ESTATUTO NACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES LEY 84 DE 1989 - LEY ÁNGEL"</p> <p>EL CONGRESO DE COLOMBIA</p> <p>DECRETA:</p> <p>ARTÍCULO 1°. OBJETO. El objeto de la presente ley es fortalecer la lucha contra el maltrato animal, mediante acciones que garanticen la prevención, investigación y sanción de la violencia contra los animales en los procesos penales y policivos. Así mismo, se actualiza el Estatuto Nacional de Protección de los Animales, Ley 84 de 1989 con el fin de incluir nuevas formas de protección y garantizar la ejecución de acciones integrales de sensibilización ciudadana, prevención y atención efectiva del maltrato animal.</p> <p>ARTÍCULO 2°. Adiciónese un numeral al artículo 43° de la Ley 599 de 2000, así:</p> <p>12. La prohibición de adquisición, tenencia, cuidado o albergue de animales a cualquier título</p> <p>ARTÍCULO 3°. Adiciónese un artículo a la Ley 599 de 2000, así:</p> <p>ARTÍCULO 50A. LA PROHIBICIÓN DE ADQUISICIÓN Y TENENCIA DE ANIMALES. La prohibición al penado de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales de cualquier especie, se aplicará a través de cualquier medio como compra, donación, permuta, adopción, sentencia judicial, u otro. Además, incluye la prohibición de recibir animales por prescripción, sucesión testamentaria u otros cambios de estado legal.</p> <p>ARTÍCULO 4°. Adiciónese un inciso al artículo 51° de la Ley 599 de 2000, así:</p> <p>La prohibición de adquisición, tenencia, cuidado o albergue de animales aplicará por el doble del tiempo de la pena impuesta.</p> <p>ARTÍCULO 5°. Modifíquese el artículo 339A de la Ley 599 de 2000, así:</p> <p>ARTÍCULO 339A. MUERTE AL ANIMAL. El que, por cualquier medio o procedimiento, maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado causándole la muerte, incurrirá en pena de prisión de veinticuatro (24) a cincuenta y seis (56) meses, inhabilidad especial de dos (2) a cinco (5) años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación</p>

<p>con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de treinta (30) a sesenta (60) salarios mínimos mensuales legales vigentes.</p> <p>ARTÍCULO 6°. Modifíquese el artículo 339B en la Ley 599 de 2000, así:</p> <p>ARTÍCULO 339B. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN PUNITIVA. Las penas contempladas en los artículos 339A y 339C se aumentarán de la mitad a tres cuartas partes, si la conducta se cometiere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Con sevicia; b. Cuando una o varias de las conductas mencionadas se perpetren en vía o sitio público; c. Valiéndose de inimputables o de menores de edad o en presencia de aquellos; d. Cuando se cometan actos sexuales con los animales; e. Cuando alguno de los delitos previstos en los artículos anteriores se cometiere por servidor público o quien ejerza funciones públicas. f. Cuando la conducta sea registrada, difundida o promovida a través de cualquier medio de comunicación masivo, plataforma digital, red social o medio de naturaleza análoga, fomentando su comisión o generando apología del maltrato animal. g. Cuando la conducta punible se realice con fines de explotación económica. <p>PARÁGRAFO 1. Quedan exceptuadas de las penas previstas en esta ley, las prácticas, en el marco de las normas vigentes, de buen manejo de los animales que tengan como objetivo el cuidado, reproducción, cría, adiestramiento, mantenimiento; las de beneficio y procesamiento relacionadas con la producción de alimentos; y las actividades de entrenamiento para competencias legalmente aceptadas.</p> <p>PARÁGRAFO 2. Quienes adelanten acciones de salubridad pública tendientes a controlar brotes epidémicos, o transmisión de enfermedades zoonóticas, no serán objeto de las penas previstas en la presente ley.</p> <p>PARÁGRAFO 3. Quienes adelanten las conductas descritas en el artículo 7° de la Ley 84 de 1989 no serán objeto de las penas previstas en la presente ley.</p> <p>ARTÍCULO 7°. Inclúyase el artículo 339C en la Ley 599 de 2000, así:</p> <p>ARTÍCULO 339C. LESIONES QUE MENOSCABEN GRAVEMENTE LA SALUD O LA INTEGRIDAD FÍSICA DEL ANIMAL. El que, por cualquier medio o procedimiento, con el ánimo de maltratar, cause lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física de un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado, incurrirá en pena de prisión de veinte (20) a cuarenta y dos (42) meses, inhabilidad especial de uno (1) a tres (3) años</p>	<p>para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de quince (15) a treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes.</p> <p>ARTÍCULO 8°. Sustitúyase el artículo 14 de la Ley 84 de 1989, por el siguiente:</p> <p>ARTÍCULO 14. REDUCCIÓN DE LA MULTA. Si la persona sancionada acepta la conducta de maltrato animal, una vez impuesta la multa en el fallo de primera instancia y sin necesidad de otra actuación administrativa, podrá cancelar el cincuenta por ciento (50%) del valor de la multa dentro de los cinco (5) días siguientes al fallo de primera instancia, siempre y cuando asista obligatoriamente, dentro de este término, al Curso de Sensibilización Contra el Maltrato Animal que impartirá la alcaldía municipal o distrital y que tendrá como fin fomentar conductas de respeto y protección hacia los animales e informar de las consecuencias penales y sancionatorias por realizar actos de maltrato animal.</p> <p>PARÁGRAFO 1°: Las administraciones municipales y distritales adoptarán las medidas necesarias para impartir el curso de sensibilización al que hace referencia la presente ley, el cual deberá cumplir con los lineamientos que para tal fin expidan las entidades que conforman el Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal - SINAPYBA, dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.</p> <p>PARÁGRAFO 2°: No habrá reducción de la multa si la persona es reincidente en la conducta de maltrato animal.</p> <p>ARTÍCULO 9°. Modifíquese el artículo 46 de la Ley 84 de 1989 el cual quedará así:</p> <p>ARTÍCULO 46. COMPETENCIA. Corresponde en primera instancia a los inspectores de policía, o a quien haga sus veces, y en segunda a los alcaldes municipales o distritales, su delegado o la autoridad definida en el marco de la autonomía territorial, conocer y adelantar el proceso sancionatorio por hechos constitutivos de maltrato leve, que no causen la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física de conformidad con lo establecido en el título XI-A del Código Penal.</p> <p>Para el cumplimiento de los fines del Estado y del objeto de la presente ley, las alcaldías e inspecciones contarán con la colaboración armónica de las siguientes entidades, quienes además pondrán a disposición los medios y/o recursos que sean necesarios en los términos previstos en la Constitución Política, la Ley 99 de 1993 y en la Ley 1333 del 2009: el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como las demás entidades que conforman el Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal (SINAPYBA), los Departamentos, las Corporaciones Autónomas Regionales, las Corporaciones de Desarrollo Sostenible, las entidades territoriales con competencias en protección y bienestar animal, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66° de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos de los</p>
<p>que trata el artículo 13° de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales.</p> <p>PARÁGRAFO. Los dineros recaudados por conceptos de multas por la respectiva entidad territorial se destinarán de manera exclusiva a la formulación, divulgación, ejecución y seguimiento de políticas de protección a los animales, campañas de sensibilización y educación ciudadana y constitución de fondos de protección animal, vinculando de manera activa a las organizaciones animalistas y juntas defensoras de animales o quien haga sus veces para el cumplimiento de este objetivo.</p> <p>ARTÍCULO 10°. Modifíquese el artículo 46A de la ley 84 de 1989 el cual quedará así:</p> <p>ARTÍCULO 46A. APREHENSIÓN MATERIAL PREVENTIVA. Es el procedimiento policivo mediante el cual un animal es retirado de manera transitoria de la tenencia del presunto maltratador porque se tiene conocimiento o indicio de la realización de conductas que constituyen maltrato o que vulneran su integridad física o emocional. Este procedimiento puede ser adelantado por la Policía Nacional, los inspectores de policía, los alcaldes municipales o distritales o sus delegados. Para este procedimiento no es necesario que medie orden judicial o administrativa previa. Toda queja deberá ser atendida como máximo en las siguientes veinticuatro (24) horas.</p> <p>PARÁGRAFO 1°. Cuando se entregue en custodia el animal doméstico a las entidades de protección animal, el responsable, cuidador o tenedor estará en la obligación de garantizar los gastos de manutención y alimentación del animal sin perjuicio de las obligaciones legales que le corresponden a los entes territoriales.</p> <p>En caso de que el propietario, cuidador o tenedor del animal no cancele las expensas respectivas dentro de un plazo de quince (15) días calendario, la entidad de protección podrá disponer definitivamente para entregar en adopción el animal.</p> <p>PARÁGRAFO 2°. Como medida para evitar la revictimización de los animales aprehendidos y proteger sus derechos, el inspector de policía podrá abstenerse legítimamente de entregarlos a sus propietarios, tenedores o cuidadores, o a quienes sean los presuntos responsables de la comisión de las conductas de maltrato, hasta tanto no haya decisión en firme en el proceso verbal de maltrato animal y sin perjuicio de las sanciones de tipo penal que procedan por la comisión de aquellas.</p> <p>ARTÍCULO 11°. Sustitúyase el artículo 47 de la ley 84 de 1989 el cual quedará así:</p> <p>ARTÍCULO 47. TRÁMITE DEL PROCESO VERBAL DE MALTRATO ANIMAL. Se tramitará mediante el Proceso Verbal de Maltrato Animal las conductas que pueden ser constitutivas como maltrato y actos de crueldad hacia los animales</p>	<p>que se encuentran consagradas en la Ley 84 de 1989, la Ley 1774 de 2016 y las demás normas que las complementen o modifiquen, en las etapas siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Iniciación de la Acción. El inicio del proceso se puede adelantar de oficio o a petición por parte de la ciudadanía. Cuando la autoridad conozca en flagrancia del comportamiento de maltrato animal, podrá iniciar de inmediato la audiencia pública. 2. Citación. El Inspector de Policía, dentro de los cinco (5) días siguientes que tenga conocimiento de hechos constitutivos de maltrato animal citará a audiencia pública al presunto infractor y peticionario, si no fuera de oficio, mediante comunicación escrita, correo certificado, medio electrónico, medio de comunicación del que disponga, o por el medio más expedito o idóneo, donde se señale la norma que lo regula y el acto de crueldad animal específico el cual se está investigando. 3. Audiencia Pública. La audiencia pública se realizará en el lugar de los hechos o en el despacho del Inspector de Policía. Esta se surtirá mediante los siguientes pasos: <ol style="list-style-type: none"> a) Argumentos. En la audiencia la autoridad competente, otorgará tanto al presunto infractor como al peticionario un tiempo máximo de veinte (20) minutos para exponer sus argumentos, aportar y solicitar las pruebas que pretende hacer valer frente a los hechos generadores del presunto maltrato animal, b) Pruebas. Si el presunto infractor o peticionario solicita la práctica de pruebas adicionales, pertinentes y conducentes, y si el Inspector de Policía las considera viables o las requiere, las decretará y se practicarán en un término máximo de diez (10) días prorrogables por diez (10) días más, cuando las condiciones del caso lo ameriten. Igualmente, la autoridad podrá decretar de oficio las pruebas que requiera y dispondrá que se practiquen dentro del mismo término. La audiencia se reanudará al día siguiente al vencimiento de la práctica de pruebas. Tratándose de hechos notorios o de negaciones indefinidas, se podrá prescindir de la práctica de pruebas y la autoridad de Policía decidirá de plano. Cuando se requieran conocimientos técnicos especializados, los servidores públicos del sector central y descentralizado del nivel territorial, darán informes por solicitud del Inspector de Policía de Policía; c) Decisión. Agotada la etapa probatoria, el Inspector de Policía valorará las pruebas, impondrá las sanciones a que da lugar o se abstendrá de imponer la sanción, sustentando su decisión con los respectivos fundamentos normativos y hechos conducentes demostrados. La decisión quedará notificada en estrados. <p>Dentro de la decisión el Inspector de Policía definirá la situación jurídica del o los animales que hayan sido aprehendidos preventivamente al inicio del proceso, decisión que puede ser la figura del decomiso del o los animales o la devolución</p>

<p>del o los mismos con compromisos los cuales serán ordenados dentro de la decisión.</p> <p>4. Recursos. Contra la decisión proferida por el Inspector de Policía proceden los recursos de reposición y, en subsidio, el de apelación ante el superior jerárquico, los cuales se solicitarán, concederán y sustentarán dentro de la misma audiencia. El recurso de reposición se resolverá inmediatamente, y de ser procedente el recurso de apelación, se interpondrá y concederá en el efecto devolutivo dentro de la audiencia y se remitirá al superior jerárquico dentro de los dos (2) días siguientes, ante quien se sustentará dentro de los dos (2) días siguientes al recibo del recurso. El recurso de apelación se resolverá dentro de los ocho (8) días siguientes al recibo de la actuación.</p> <p>5. Cumplimiento o ejecución del fallo y de orden de Policía emitidas. Una vez ejecutoriada la decisión que contenga una orden de Policía o una sanción, esta se cumplirá en un término máximo de cinco (5) días.</p> <p>PARÁGRAFO 1°. Si el presunto infractor no se presenta a la audiencia sin comprobar la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, la autoridad tendrá por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento de maltrato animal y entrará a resolver de fondo, con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades, salvo que la autoridad de Policía considere indispensable decretar la práctica de una prueba adicional. En caso de inasistencia a la audiencia, el procedimiento se suspenderá por un término máximo de tres (3) días, dentro de los cuales el presunto infractor deberá aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa de inasistencia, la cual, de resultar admisible por la autoridad competente, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en este artículo.</p> <p>PARÁGRAFO 2°. El funcionario competente que conozca del proceso verbal de maltrato animal podrá emitir órdenes de policía de conformidad con lo señalado en el artículo 150 de la Ley 1801 de 2016.</p> <p>ARTÍCULO 12°. Sustitúyase el artículo 48 de la ley 84 de 1989 el cual quedará así:</p> <p>ARTÍCULO 48. PRINCIPIOS DEL PROCESO VERBAL DE MALTRATO ANIMAL. Son principios del procedimiento: la oralidad, la gratuidad, la inmediatez, la oportunidad, la celeridad, la eficacia, la transparencia y la buena fe.</p> <p>ARTÍCULO 13°. Sustitúyase el artículo 49 de la ley 84 de 1989 el cual quedará así:</p> <p>Artículo 49. MEDIOS DE PRUEBA. Son medios de prueba del proceso único de Policía los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Los documentos. 2. El testimonio. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. La entrevista. 4. La inspección. 5. El peritaje. <p>Los demás medios consagrados en la Ley 1564 de 2012.</p> <p>ARTÍCULO 14°. Sustitúyase el artículo 50 de la ley 84 de 1989 el cual quedará así:</p> <p>ARTÍCULO 50. FACTOR DE COMPETENCIA. La competencia del Inspector de Policía para conocer sobre los comportamientos que estén relacionados con el maltrato animal, se determina por el lugar donde suceden los hechos.</p> <p>ARTÍCULO 15°. Sustitúyase el artículo 51 de la ley 84 de 1989 el cual quedará así:</p> <p>ARTÍCULO 51. DEL DECOMISO. Es la privación definitiva de la tenencia o propiedad de un animal que haya sido víctima de maltrato y que la autoridad competente considera no viable su devolución.</p> <p>PARÁGRAFO. El Inspector de Policía dejará a disposición del Centro de Bienestar del Municipio el animal o animales que haya decomisado por hechos constitutivos de maltrato animal.</p> <p>ARTÍCULO 16°. Sustitúyase el artículo 52 de la ley 84 de 1989 el cual quedará así:</p> <p>ARTÍCULO 52. TERCERO INTERVINIENTE. Dentro del Proceso Verbal de Maltrato Animal, la sociedad civil que sea reconocida como activista de protección a hacia los animales, las Juntas Defensoras de Animales o las entidades sin ánimo de lucro que demuestren la defensa de hacia los animales, podrán solicitar ante el Inspector de Policía hacer parte dentro del proceso con el fin de coadyuvar en dicho proceso y podrán ejercer todas las actuaciones procesales que tengan como fin de salvaguardar la vida e integridad del animal.</p> <p>PARÁGRAFO. El Inspector de Policía deberá realizar un análisis de la solicitud con el fin de verificar la pertinencia de la participación del tercero interviniente dentro del Proceso Verbal de Maltrato Animal.</p> <p>ARTÍCULO 17°. Sustitúyase el artículo 53 de la ley 84 de 1989 el cual quedará así:</p> <p>ARTÍCULO 53. GASTOS Y EXPENSAS. En casos donde los animales aprehendidos preventivamente o sujetos a decomiso, generen gastos como alimentación, servicios veterinarios y otros, el declarado responsable del maltrato estará obligado a reembolsar dichos costos a la administración municipal. Esta obligación será formalizada en la decisión final dictada por autoridad competente.</p> <p>ARTÍCULO 18°. Sustitúyase el artículo 54 de la ley 84 de 1989 el cual quedará así:</p> <p>ARTÍCULO 54. PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD. La acción de policía en el proceso verbal de maltrato animal caduca en un año contado a partir de la</p>
<p>ocurrencia del hecho que tipifique un comportamiento de maltrato y actos de crueldad para con los animales o del momento en que el afectado tuvo conocimiento de él. Las sanciones impuestas prescribirán en cinco (5) años, a partir de la fecha en que quede en firme la decisión de las autoridades de policía en el proceso verbal de maltrato animal.</p> <p>ARTÍCULO 19°. Sustitúyase el artículo 55 de la ley 84 de 1989 el cual quedará así:</p> <p>ARTÍCULO 55. FALTA DISCIPLINARIA DE LA AUTORIDAD DE POLICÍA. La autoridad de Policía que conozca y adelante el proceso verbal de maltrato animal en primera o segunda instancia y incumpla los términos señalados por este capítulo o que incurra en omisión y permita la caducidad de la acción o de las sanciones, incurrirá en falta disciplinaria grave, de conformidad con el régimen disciplinario aplicable.</p> <p>ARTÍCULO 20°. Sustitúyase el artículo 56 de la ley 84 de 1989 el cual quedará así:</p> <p>ARTÍCULO 56. Las sanciones impuestas no eximen de la responsabilidad policiva señaladas en el título XIII de la ley 1801 de 2016, civil, fiscal, penal o disciplinaria a que haya lugar.</p> <p>ARTÍCULO 21°. Sustitúyase el artículo 57 de la ley 84 de 1989 el cual quedará así:</p> <p>ARTÍCULO 57. En los asuntos procedimentales no previstos en este capítulo, se aplicarán las disposiciones de la Ley 1801 de 2016, La Ley 1437 de 2011 y el Código General del Proceso.</p> <p>ARTÍCULO 22°. Adiciónese un numeral al artículo 163° de la Ley 1801 de 2016, así:</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Para socorrer a un animal cuando se tenga certeza de la realización de conductas constitutivas de maltrato, que pongan en riesgo inminente la vida o integridad del animal. <p>ARTÍCULO 23° ANIMALES SILVESTRES. La imposición de las medidas correctivas contenidas en el artículo 101° de la Ley 1801 de 2016 por comportamientos que afecten a animales de especies silvestres no excluye la imposición de otras sanciones, medidas preventivas o medidas correctivas por maltrato animal como las contenidas en la presente ley, en la Ley 1774 de 2016, en la Ley 2387 de 2024 y en las demás normas que la modifiquen o sustituyan.</p> <p>ARTÍCULO 24° RUTA DE ATENCIÓN AL MALTRATO ANIMAL. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, las entidades que conforman el Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal -SINAPYBA, con participación de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, y demás</p>	<p>entidades con competencia sobre asuntos de protección y bienestar animal, expedirán la Ruta de Atención al Maltrato Animal como un instrumento para formalizar la actuación institucional coordinada en los niveles nacional, departamental y municipal o distrital para la atención de casos de maltrato animal, de acuerdo a las competencias de cada entidad.</p> <p>La Ruta de Atención al Maltrato Animal deberá incluir, como mínimo, la adopción de un canal específico para la recepción de quejas o denuncias por maltrato animal, las medidas necesarias para atender los casos reportados, y los protocolos de actuación urgente que correspondan a cada actor institucional, con el fin de salvaguardar la integridad física y emocional de los animales presuntamente maltratados.</p> <p>PARÁGRAFO 1°. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de los lineamientos mencionados en el presente artículo, los entes territoriales adoptarán, mediante acto administrativo, la Ruta de Atención al Maltrato Animal de acuerdo a las características específicas de cada territorio. Estos protocolos deberán ser actualizados cada dos (2) años.</p> <p>PARÁGRAFO 2°. Las Administraciones municipales y distritales, las Inspecciones de Policía, los Corregidores, la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), deberán reportar anualmente a la entidad encargada de coordinar el SINAPYBA los indicadores de su gestión frente a los asuntos de maltrato animal, según su competencia. El SINAPYBA consolidará la información y evaluará la eficacia de la Ruta de Atención al Maltrato Animal, para hacer los ajustes que correspondan</p> <p>ARTÍCULO 25° CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN. El Ministerio del Interior, con apoyo de las gobernaciones departamentales y las alcaldías municipales o distritales, realizará anualmente programas de capacitación y sensibilización dirigidos a los inspectores de policía en todo el territorio nacional, para instruirlos sobre las disposiciones de la presente ley y resaltar la importancia de atender de manera diligente y compasiva los casos de maltrato animal.</p> <p>Asimismo, tanto la Rama Judicial como la Fiscalía General de la Nación deberán capacitar y sensibilizar a sus funcionarios, según sus respectivas competencias, para asegurar una atención oportuna y con un enfoque integral y de cuidado frente a los delitos que atenten contra la vida y bienestar animal.</p> <p>ARTÍCULO 26° ESTUDIOS FORENSES. Dentro de los doce (12) meses siguientes a la expedición de la presente ley, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, y en coordinación con el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia de Colombia, deberá expedir protocolos o guías técnicas para la realización de los estudios forenses que sean necesarios en la investigación de delitos relacionados con maltrato animal.</p>

Estos protocolos o guías técnicas serán de obligatorio cumplimiento por parte de los profesionales en Medicina Veterinaria o Medicina Veterinaria y Zootecnia que actúen como peritos en los procesos judiciales correspondientes, garantizando así la uniformidad y la rigurosidad científica en la recolección y el análisis de pruebas.

PARÁGRAFO 1: La elaboración y expedición de dichos protocolos deberá contar con la participación activa y voluntaria de las Asociaciones y Sociedades Gremiales, Científicas y Profesionales de Medicina Veterinaria, Medicina Veterinaria y Zootecnia, y Zootecnia.

PARÁGRAFO 2: Con el propósito de fortalecer la investigación forense en casos de maltrato animal, los municipios, distritos o gobernaciones, así como la Fiscalía General de la Nación, estarán facultados para suscribir contratos o convenios con instituciones de educación superior de naturaleza pública o privada, clínicas veterinarias legalmente constituidas u otros entes territoriales que dispongan del personal médico veterinario experto en medicina forense o áreas afines.

ARTÍCULO 27° (NUEVO). Adiciónese el siguiente literal al artículo 6 de la Ley 84 de 1989, así:

Z.1. Abandonar a un animal doméstico o domesticado.

ARTÍCULO 28° Vigencia y Derogatoria. La presente rige a partir de su promulgación y publicación en el Diario Oficial y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el título IX "Disposiciones generales" y el artículo 58 de la Ley 84 de 1989.

En los anteriores términos fue aprobado con modificaciones en primer debate el presente Proyecto de Ley, según consta en el Acta No. 28 de sesión del 11 de diciembre de 2024. Así mismo fue anunciado entre otras fechas el día 10 de diciembre de 2024, según consta en el Acta 05 de Sesión Conjuntas Senado de la República y Cámara de Representantes de esa misma fecha.


JUAN CARLOS WILLS OSPINA
Poente Único


ANA PAOLA GARCÍA SOTO
Presidenta


AMPARO YANETH CALDERÓN PERDOMO
Secretaría